

**Las formas sociales del derecho contemporáneo:
el nuevo *ius commune***

Pompeu CASANOVAS

Universitat Autònoma de Barcelona

Working Paper n.146
Barcelona 1998

"Stick close to your desk and never go to sea,
and you all may be rulers of the Queen's Navee"

First Lord of the Admiralty in H.M.S. Pinafore
Gilbert&Sullivan (R.L.Abel, Ph.S.C.Lewis, 1995:285)

"En los años sesenta, el cómico Lenny Bruce solía decir que en la ciudad de Nueva York incluso los gentiles eran judíos. En los Estados Unidos saturados de abogados de hoy en día, diría que incluso los legos en derecho son abogados. O, al menos, que todo político, agente del gobierno, y ejecutivo corporativo, tenga o no estudios jurídicos, piensa en gran medida como un abogado. Si los abogados norteamericanos no son la única fuerza activa que mantiene al sistema contradictorio, puede que sea en parte porque han enseñado también a hacerlo a sus conciudadanos".

R.A.Kagan (1994:62)

1. INTRODUCCIÓN¹

1.1.El nuevo *ius commune* contemporáneo

En este artículo voy a intentar esbozar el nuevo panorama de la concepción del derecho y de la estructura organizativa del mismo en las sociedades contemporáneas. Su objetivo, pues, es limitado: descriptivo y generalista.

A partir de algunos fenómenos que ya han sido bien establecidos por la literatura especializada, intentaré mostrar la crisis del parámetro normativo en la concepción de la constitución y descripción del derecho. Para decirlo con claridad: la crisis del estado contemporáneo es *también* la crisis de la concepción tradicional de su estructura jurídica. No solamente ha cambiado el modo de concebir la legitimación y articulación institucional del estado: la apertura de los mercados globalizados cambia la naturaleza de la organización misma. De forma que la propia concepción del derecho público o del derecho privado a partir de "derechos", "obligaciones" o "deberes" que "derivan" de "normas" (sean éstas heteronómicas o contractuales) o "reglas" ya no puede ser utilizada sino limitadamente ni en la descripción de la situación de los actores (o "sujetos de derecho") ni en la construcción de instituciones, políticas o administraciones públicas².

Otro modo de decir lo mismo consiste en salir del falso dilema "teoría jurídica" vs. "sociología del derecho". Esta era la perspectiva adoptada por la

tradición germánica, por los iusrealistas pragmatistas norteamericanos de los años treinta³ y, posteriormente, en los años sesenta, con todas la vueltas que se quiera, por los sociólogos del *Law & Society Movement*⁴. Era la época en que Philip Selznick creía que "*la sociología puede contribuir mejor al derecho cultivando su propio jardín*" (1968: 192).

Al contrario, estas páginas pretenden mostrar que la profundidad de los cambios en las profesiones jurídicas inhabilitan cualquier intento de establecer seriamente una distinción tajante entre lo que es y lo que no es "derecho", o lo que es o no es "sociología del derecho". Por decirlo de otro modo, la pragmática del derecho contemporáneo incorpora también la modificación de los usos de sus posibilidades semánticas⁵. No es una cuestión de significado, sino de prácticas efectivas que cambian tan rápidamente como sea preciso para adaptarse a la nueva movilidad de los mercados y a la cultura generada por el impacto de las nuevas tecnologías. Para el análisis de la nueva situación ya no basta con el optimismo de creer que "*el verdadero conocimiento relativo a las relaciones e instituciones humanas básicas encontrará inevitablemente su lugar en la doctrina jurídica*" (P. Selznick, *ibid*). Creo que hoy no puede sostenerse ya que la tarea de la sociología del derecho es el "*estudio del derecho por sí mismo, como parte del orden natural*" (*ibid.*). Para modelizar los fenómenos jurídicos contemporáneos hay que llevar el análisis un poco más lejos y modelizar también -como intentaré mostrar- los procesamientos de información y los procesos cognitivos y comunicativos de sus actores. Especialmente porque no hay ninguna garantía de que en la nueva situación, la técnica jurídica integre conocimiento sociológico sobre su propio uso. Al contrario: la apertura de los mercados conlleva la diferenciación y oclusión competitiva de los comportamientos y lenguajes de los actores⁶.

Crisis del estado no significa aquí desaparición o disminución de sus organismos. También al contrario: se trata solamente de la crisis de una **forma particular** de estado. La que adoptó la estructura organizativa del derecho como sistema de normas o reglas generales para construir su propia estructura y ámbito de actuación. Es la función reguladora y sancionadora del *Rechtsstaat*, *Rule of Law*, *Estado de Derecho*, basada en la soberanía del Estado-nación lo que se halla en crisis. No, en cambio, su función de gobierno y administración de los ciudadanos. Desde este punto de vista, pienso con M. Mann (1994), que el estado está en sus comienzos, y no en su final. Generalmente no son los ciudadanos particulares los que están en situación de transferir de una parte a otra del planeta grandes masas de capital, sino las corporaciones y empresas.

La actuación de los gobiernos y la estructura del estado entran como un cúmulo de variables a tener en cuenta en la actuación de las empresas. Pero la estructura reticular de unos y otras constituyen organizaciones culturalmente específicas⁷. Esto significa que su articulación jurídica va a estar libremente determinada por las actitudes, relación y cálculo de beneficios obtenibles intra y entre "culturas jurídicas"⁸ que gozan cada vez de mayor plasticidad y facilidades de invención de nuevas formas. Contratos, pactos, arbitrajes, mediaciones, se suceden en la creación de un tipo de derecho que ya ha sido cualificado de "flexible" por algunos especialistas⁹. Paradójicamente, esta situación no limita, sino que expande el mercado tradicional de los profesionales (Y. Dézalay, B. Garth, 1996). Cambia, una vez más, la naturaleza y el tipo de actuación de lo que podemos entender como "profesional" u "operador" del derecho.

En estas páginas, salvo breves alusiones, no contemplaré específicamente la situación española¹⁰.

1.2. Profesiones jurídicas

El concepto de "profesión jurídica" -o "profesionales del derecho"- y la elaboración de parámetros para intentar comprender su situación no está exento de problemas.

Problemas de significado, en primer lugar: ¿de qué estamos hablando? ¿De funcionarios (*civil servants*), profesiones liberales, auxiliares, hombres de empresa, de Estado...?

El significado de "profesión jurídica" parece tener un ámbito semántico mayor que la clásica partición en: jueces o magistrados, abogados, procuradores, fiscales, secretarios, registradores y notarios. ¿Qué sucede con los "agentes de mediación", "economistas", los "árbitros", los "juristas", "profesores universitarios"? ¿Y con las profesiones marginales que en el área de derecho norteamericano se denominan "*paralegal*": asistentes de los tribunales y bufetes, historiadores, estenógrafos, administrativos...?¹¹.

Problemas de análisis, en segundo lugar: (i) hay diferencias en el lenguaje de las distintas ciencias sociales (economía, sociología, psicología, ciencia política, antropología); (ii) diferencias de calidad de los datos disponibles en los distintos países; (iii) diferencias entre las distintas "culturas jurídicas" y tradiciones (derecho continental, *common law*, derecho de ámbito no

occidental)¹²; (iv) existe, sobre todo, el problema de la incompatibilidad de categorías y clasificaciones de los datos cuantificados disponibles (hay diferencias entre *lawyers-barristers/abogados*; diferencias entre grados de litigiosidad en países de niveles similares de desarrollo económico y social, e.g. Holanda y Alemania)¹³.

Las dificultades de unificar criterios en obras de carácter general han sido notables. Las directrices de Richard L. Abel y Philip S.C. Lewis en sus tres volúmenes de *Lawyers in Society* (1988) son indicativas al respecto. "*Las 'profesiones' -sugiere Jon T. Johnsen (1988: 54)- no son un tipo de ocupación, sino una relación entre una ocupación y una educación específica*".

Llevando el argumento un poco más allá, entenderé por "profesión jurídica" no una labor, ocupación o trabajo, sino también una relación: la relación entre un trabajo específico y las funciones que cumple en el ámbito del espacio jurídico que ocupa (público o privado).

Concebir las profesiones como una "relación" complica un poco las cosas. Pero permite un análisis preliminar y primario en la situación que más adelante describiré: pese a la buena investigación existente, sabemos algo, aunque no lo suficiente, sobre el papel efectivo que cumplen los profesionales del derecho en las cambiantes sociedades contemporáneas¹⁴. Y concretamente en España, sabemos menos aún, porque los estudios cuantificados son escasos, los datos no son coincidentes, hay falta de coordinación entre los análisis macrosociológicos y ausencia generalizada de análisis cualitativos sobre el terreno (Toharia, 1995; S. Pastor, 1993; P. Stangeland, 1994; P. Casanovas, 1997).

Me centraré, en este sentido, en profesiones ya establecidas, referentes a la Administración de Justicia o bien a las múltiples aperturas del mercado para los bufetes de abogados, considerados como auténticas empresas de servicios jurídicos. La ventaja de concebir un juez, e.g., en relación a la función que desempeña estriba en el deslinde que permite del sentido común "jurídico" cultivado en las facultades de derecho: un juez contemporáneo no es solamente quien "juzga", sino también quien "media" en conflictos sociales o quien legitima la participación democrática de los ciudadanos en la función de juzgar. Esta perspectiva permite también transcender la identificación meramente individual de los procesos de decisión: las decisiones jurídicas son producto de un conjunto social, coordinado y organizado de factores que no siempre son descriptibles mediante correlaciones lineales (P. Casanovas, E. Ardèvol, J. Mach, 1998).

Marc Galanter (1981:17) especificaba hace ya algunos años la quiebra de la visión "centrípeta" de la justicia:

"Hemos pasado de una imagen centrípeta (implícita en la idea de "acceso a la justicia") de los tribunales como solucionadores de los conflictos que contemplan, a una imagen centrífuga de los tribunales como un elemento de un complejo sistema de disputas y regulación. En este sistema, los tribunales (y otras instituciones oficiales) no son las únicas fuentes de mensajes normativos, de la misma forma que no son la única plaza donde se aplican los controles directamente. Debemos examinar los tribunales en el contexto de sus rivales y compañeros. A tal efecto, hemos de poner entre paréntesis nuestra habitual perspectiva de 'centralismo jurídico', una representación donde los órganos del Estado (y su aprendizaje) ocupan el centro de la vida jurídica y se mantienen en una relación de control jerárquico respecto de otros órdenes normativos como la familia, la corporación, la red empresarial".

Por mi parte, procederé de la siguiente manera:

(1) Describiré algunos cambios en el mundo jurídico profesional en las sociedades contemporáneas.

(2) Formularé luego una hipótesis general: estos cambios obedecen a factores distintos en cada país en función de su estructura política, su cultura jurídica y el fenómeno descrito en la literatura como "globalización", pero deben interpretarse a la luz de la crisis del Estado del Bienestar y del cambio de forma del propio derecho (de una forma "normativa" a una forma común "participativa"). De aquí la denominación de la forma del derecho contemporáneo como un nuevo "*ius commune*"¹⁵, y la denominación de la forma de describir este nuevo derecho como "modelo organizativo". Como se verá más tarde, en esta situación general, resulta provechoso también prestar atención al valor simbólico del derecho y no solamente a su "contenido normativo"¹⁶.

2. DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS CAMBIOS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS

2.1. Presentación

Los cambios en las profesiones jurídicas a partir de la II Guerra Mundial han sido espectaculares. Baste recordar que hasta 1960, las mujeres constituían solamente una pequeñísima fracción en la profesión de abogado, fiscal o juez. Las mujeres no eran admitidas en la magistratura francesa antes de 1945. La

primera mujer juez en Holanda fue nombrada en 1947, y las mujeres italianas no pudieron acceder a esta posición hasta 1963 (R.L. Abel, 1988: 35). El cambio demográfico más profundo se da en los países desarrollados entre 1960 y 1980. Y, más en concreto, respecto a cambios profundos en la demanda mercantil y administrativa, en la década de 1980. Se trata, pues, comparativamente, de cambios recientes, de una nueva situación jurídica.

"Casi todos los países capitalistas han experimentado un rápido aumento del volumen de sus profesiones jurídicas en las últimas dos décadas -escribe Abel (1988: 31)-. El índice de expansión es particularmente notable porque sucede a un largo período de estancamiento. En Alemania, no hubo virtualmente ningún cambio en la ratio de población de abogados entre el período que siguió a la abolición del numerus clausus en 1879 y la caída de mediados de los sesenta. En Holanda, la población por abogado aumentó de hecho de 3.700 en 1850 a 7.700 en 1920, y tan tarde como en 1970 había caído a sólo 6.200. En Francia, había 7.321 abogados en 1937, pero sólo 6.565 en 1960 (...). El mundo del common law presenta tasas similares: la ratio de la población por abogado en USA era la misma en 1951 que la que se tenía en 1900; en Inglaterra, el número de solicitors en 1948 era casi exactamente el que se tenía en 1890 a pesar del crecimiento substancial de la población".

En la revisión que el propio R.L. Abel ha realizado recientemente de su trabajo pionero, las razones de estos cambios aparecen si cabe de forma más clara: la posición de control "pivotante" del mercado, la evidencia de que "las profesiones de derecho civil y de derecho común están convergiendo como concomitantes en la globalización de la economía" (Abel, 1995b: 4), los imperativos de mercado causantes de que "los productores de servicios busquen no sólo controlar la oferta, sino también estimular la demanda" (ibid. 5-6). En suma: la rápida expansión de una economía global.

"Las culturas nacionales fallan, al interferir y obstruir acuerdos informales entre empresarios. Los conflictos pueden ser llevados a una gran cantidad de foros, cada uno de ellos con técnicas distintas y expertos diferentes. Con la dislocación de las jurisdicciones establecidas, se desarrolla la competición entre naciones y disciplinas. El conocimiento sobre el que las nuevas demandas jurisdiccionales pueden ser basadas es transitorio y fluido. Los consumidores (corporaciones, instituciones financieras, y estados) son expertos. Las apuestas son altas: la formación y término de grandes empresas (fusiones y adquisiciones, quiebras y reorganización), los negocios, y las relaciones con y entre estados nacionales y transnacionales (licencias, regulación, antitrust, y contratos

estatales). [] Los principales competidores en este terreno son los abogados, los contables, los consultores de gestión, y, en menor medida, los banqueros de inversiones" (R.L. Abel 1995b: 12).

2.2. (i) Demografía

Compárese con cifras más recientes en todos los terrenos. En USA (1980), 369.000 abogados (por 192.353 en 1951) y, para las mismas fechas, 19.160 jueces contra 7.978 en 1951. Francia tenía en 1983, 15.757 abogados y 5.640 jueces. Italia, en 1980, 25.000 abogados y 7.692 jueces. Alemania ha pasado de 13.020 abogados y 11.780 jueces en 1962 a 33.750 y 20.000, respectivamente.

En España el cambio ha llegado algo más tarde, pero ha sido súbito y notable. El Colegio de Abogados de Barcelona, e.g., tenía 5.000 colegiados en 1987. Los datos que ofrecía la *Memoria* de 1995 eran de más de 13.000. La *Memoria* de 1997 sube la cifra a 15.000. Igual que en Madrid (de 13.000 a 24.000; cerca de 40.000 en 1997), el número de abogados se ha triplicado en pocos años. Esto significa que los abogados son jóvenes y tienden a ser ambiciosos y agresivos, probablemente con indistinción de géneros¹⁷.

Esta "explosión demográfica" o transformación de la ratio de profesionales por número de habitante es el primer hecho reseñable. Aunque es posible matizar un poco más.

Creo que es posible distinguir tres fases en el proceso demográfico: (i) despegue paulatino y no uniforme en los años cincuenta; (ii) explosión de mediados de los sesenta, incentivada por la reacción a la crisis industrial durante los setenta; (iii) implosión y reactivación a mediados de los ochenta.

Obsérvese que este ciclo que culmina en la "implosión" demográfica del mercado profesional sigue de cerca el movimiento político liberal que culminó con el establecimiento de un nuevo régimen de capitalismo mercantil internacional. Los investigadores han utilizado la expresión "Big-Bang" para referirse a la relación entre ratio demográfica profesional y los mercados financieros y bursátiles:

"La expansión del mercado secundario ha sido conducido a su peso actual con el 'Bing Bang' en Londres. La vía al Big Bang fue alimentada en parte por la liberalización de los índices de cambio monetario del control directo del estado

en 1979. Esta liberalización aceleró el desarrollo de los mercados de futuros y opciones en instrumentos financieros y monetarios. Liberalizando el London Stock Exchange del conjunto de disposiciones que lo habían regulado, el Big Bang - más una implosión que una explosión- absorbió potenciales constructores de mercado de Estados Unidos, Japón y otros lugares. Liberó a los grandes bancos americanos, especialmente, de las restricciones impuestas por la Glass-Steagall Act y convirtió a Londres en un lugar atractivo para las inversiones" (J. Flood, 1995: 143).

En el mismo sentido se manifiesta Yves Dézalay (1993: 53):

"En un contexto de crisis donde la mayor parte de los sectores experimentan un crecimiento casi nulo, cuando no negativo, el mercado de las consultorías profesionales muestra una salud insolente. Las grandes empresas de auditores -los big eight- se jactan de poseer un índice progresivo de negocios del 20 al 30%. Sus departamentos más específicamente dedicados a la reestructuración industrial y financiera muestran tasas de crecimiento anual del 50% o más! La 'Management Consultancies Association', cuyos miembros representan las dos terceras partes del mercado británico de consultores, considera que su volumen de negocios ha crecido el 36% al 1986 y casi lo mismo en 1987. La profesión jurídica -al menos la que se consagra al mercado financiero- sigue el movimiento, aunque con cierto retraso. En Estados Unidos, la profesión jurídica ha multiplicado su volumen de negocios por 6 en el curso de los últimos 25 años. Al mismo tiempo, el número de bufetes con más de 50 lawyers ha pasado de 38 a 508".

2.3. (ii) Litigación

El crecimiento se ha producido tanto en las "culturas jurídicas" que inducen a acudir a los tribunales (*litigation-prone*) como en aquellas que la evitan o, al menos, no la promueven. Pero los cambios deben reconducirse a la **estructura de las instituciones construidas en cada Estado**¹⁸. Austria, Bélgica y Alemania son culturas pro-litigadoras. Italia, Dinamarca, Holanda y Japón, culturas no-litigadoras. En 1984, Bélgica tenía 94 abogados y 20 jueces por 100.000 habitantes. Alemania 80/20. Italia 72/11. Holanda 33/6. Japón 9/2 (E. Blankenburg, 1991, 1997).

Pero esta ratio puede resultar engañosa. La "pirámide de litigación" - desde los métodos informales, a la disuasión, negociación, conciliación y, en su caso, sentencia- se construye de forma diferente en cada país. Los

procedimientos de mediación y arbitraje han experimentado un aumento proporcional al número de casos que no pueden ser formalmente solucionados, entre otras razones, porque los tribunales no pueden hacer frente de forma eficaz al aumento del número de demandas (J.P. Bonafé-Schmitt 1991; J. Faget, 1997; Santos Pastor, 1993). Pero, de nuevo, no es posible establecer aquí correlaciones simples entre número de demandas, respuestas de la Administración de Justicia y tipo de estado. Hay una serie de procesos que tienen que ver con la estructura de los mercados y la actividad alternativa de los profesionales.

Tomemos el caso "anómalo" de Japón¹⁹. Los analistas han solido referir el bajo nivel de litigiosidad y la aparente ausencia de profesiones jurídicas a la "cultura" japonesa.

"Japón es uno de los países donde la población ha vivido un conflicto de sistemas normativos -escribe J. Carbonnier (1991: 128)-. Su Código Civil, de origen occidental (germánico, dicen unos; francés, dicen otros) fue emplazado, en la era Meiji, sobre un fondo consuetudinario de espíritu religioso, patriarcal, feudal, de una coherencia y de un vigor excepcionales. Este fondo consuetudinario, en el que contaba más el honor que lo contencioso, fue legalmente relegado a la esfera de lo infra-jurídico. Pero en terrenos como el de la familia o incluso el de la responsabilidad, acaso no ha resistido y ha reaccionado sobre lo jurídico, no ha incidido sobre él, acaso no lo ha reinterpretado?".

Masaji Chiba y Takeyoshi Kawashima (1963) ofrecían de hecho esta interpretación: *"para los japoneses, el derecho es indeterminado, concebido como algo situacionalmente contingente. En consecuencia, la gente rechaza lo judicial, que toma los derechos como si fueran algo fijo"*. Takao Tanase (1990) sugiere una explicación que resulta más convincente para la baja tasa japonesa de litigiosidad: lo que llama el "modelo de gestión burocrática".

Es decir, por un lado, la existencia de alternativas reales con compensaciones económicas prefijadas (para los casos rutinarios: seguros, accidentes de automóvil, laborales... Estas alternativas (consulta jurídica, compensación-estándar, mediación extra-judicial (*chotei*), Centros de Resolución de Conflictos...) funcionan como tales al margen de los tribunales de justicia, pero requieren **también** personal especializado. En 1971, 16.396 conflictos fueron sometidos a *chotei*. La participación de abogados en la mediación ha

aumentado últimamente a cerca del 46% para los demandantes y 23% para los demandados.

Pero, por otro lado, la sociedad no-litigiosa de Japón no ha crecido de forma espontánea: es el producto de una organización planificada y cultivada por aquellas élites y empresas que obtienen ventajas con este sistema. La compensación suele ser -según Tanase- injusta (cerca de 1/3 menos de lo que se obtendría ante un tribunal). La gestión empresarial y burocrática de la cultura "produce" una ausencia de litigios que evita, de hecho, un coste económico a expensas de la pérdida de legitimidad del sistema²⁰.

2.4. (iii) Organizaciones colectivas

Tomemos ahora el caso de un país cercano a nosotros en desarrollo, nivel económico y transición democrática: Portugal. Uno de los resultados más interesantes que arroja el reciente libro del equipo de Boaventura de Sousa Santos (1996) sobre el papel de la Administración de Justicia y el desarrollo de la litigiosidad es el cambio que constatan en los agentes sociales que constituyen la demanda de servicios jurídicos: ya no son individuos, sino bancos, sociedades mercantiles, organizaciones financieras, compañías de seguros (1996: 687). Las acciones más frecuentes son las acciones por deuda, suspensión de pagos y quiebra. En Porto y en Lisboa, las acciones con actor colectivo en este tipo de demandas representan el 68 y el 66% del total. Los autores denominan el modelo resultante "modelo liberal-corporativo".

Traigo a colación el caso portugués porque se trata de un primer estadio de las sociedades en transición. De hecho, la importancia de las corporaciones en las demandas no es nueva. M. Horwitz (1992) explica como el año 1890 el *Justice* Stephen Field estimaba que las tres cuartas partes de la riqueza de los Estados Unidos estaba controlada por corporaciones. Hacia 1904, dos mil empresas (aprox. el 1% del número total de empresas), producían el 40% de los bienes industriales del país.

Pero las transacciones y conflictos **no** requerían un trato jurídico especial: pocos profesionales del derecho podían manejar el volumen de transacciones y conflictos hasta la II Guerra Mundial.

La situación cambia radicalmente más tarde. Y, en concreto, en la década 1980-1990 se experimenta un salto cualitativo en los países industrializados respecto a la propia profesión jurídica.

Marc Galanter, Stewart Macaulay, Tom Palay y Joel Rogers -*sintetizando los resultados del Business Disputing Group de la Universidad de Wisconsin (1991)*- lo explican así:

"(...) en términos absolutos, el nivel de consumo empresarial de asistencia jurídica ha experimentado un aumento espectacular. Las empresas utilizan más abogados, y las empresas de negocios, como máximos consumidores de talentos jurídicos, han incrementado su cuota relativa de participación en el consumo de asistencia legal en Estados Unidos. Es aún quizás más espectacular el incremento de la litigiosidad en conflictos comerciales entre empresas, esto es, el recurso a mecanismos 'contractuales' para resolver estos conflictos. (...). Este mayor recurso a la justicia viene reflejado por el hecho de que, desde 1970, las demandas contractuales (no las de daños o las de derechos civiles, como generalmente se cree) se han convertido en la clase más importante de casos civiles en los tribunales federales. (...). Los datos sugieren que la proporción de este tipo de conflictos entre empresas se multiplicó por cuatro entre 1971 y 1986".

Las empresas americanas gastan al año unos **80.000 millones** de dólares en asistencia legal. Pero la interpretación de este hecho y de las cifras anteriores debe hacerse con cautela. Que yo conozca, el estudio más minucioso hasta la fecha sobre la litigación de grandes empresas en tribunales federales es el de Terence Dunworth y Joel Roberts (1996). Los autores muestran que, al menos para este nivel de conflictos y dejando de lado un pequeño número de empresas afectadas, "el proceso de litigación es, de hecho, menor que el crecimiento de la economía" (1996: 559). El control y los conflictos existen, pero hay bases para suponer un aumento del "gobierno informal"²¹. Esto no disminuye, sino que incrementa el papel de las profesiones jurídicas en las transacciones.

La flexibilidad se ha impuesto en el derecho contractual: paradójicamente, una mayor movilidad e inseguridad económica requiere acuerdos a largo plazo, que, a su vez, promueven un nuevo tipo de contratos no clásicos, "flexibles", en la industria: más que competir en precios, las empresas compiten en calidad, servicio, tecnología y productos. Deben asegurar, pues, cierta continuidad en el cambio tecnológico de sus máquinas y la reconversión de sus plantas para la adaptación a la movilidad del mercado (J.P. Esser, 1996: 625).

En Europa se vive también un proceso de concentración de intereses y de cambio de la forma jurídica de tratamiento de las transacciones y conflictos en el mercado. Los estudios de V. Gessner, V. Olgati, Y. Dézalay, respectivamente, sobre tribunales, profesionales y *lex mercatoria* muestran un comportamiento de las corporaciones y de los agentes de defensa de intereses corporativos (como las Cámaras de Comercio) que no por atípico resulta nuevo: la multiplicidad de soluciones jurídicas sobre la base de negociaciones controladas mediante el uso de **formas jurídicas propias**. Abogados, no políticos. Arbitros y mediadores, no jueces. Asociaciones de intereses, no partidos políticos. El intento, en suma, de articular el control de las cuotas de mercado a partir de la predeterminación de sus condiciones y de la anticipación de los posibles conflictos. Aunque esto choque con la legislación estatal.

Está claro, en esta situación, que la herencia decimonónica de la partición del espacio colectivo en público o privado, o el uso de un modelo de actuación de los decisores a partir del esquema normativo de creación/ interpretación/ aplicación de la ley en los tribunales, resulta inadecuado para describir las condiciones de actuación de los profesionales del derecho.

A esto debe sumarse la situación de las distintas magistraturas. Hay bastantes indicios de que los jueces europeos suelen desconocer no sólo el nuevo contexto internacional, sino también las leyes extranjeras. Según H.v. Freyhold, V. Gessner y V. Olgati (1996), hay entre 100.000 y 200.000 casos civiles anuales de derecho internacional en los tribunales de primera instancia europeos. Pero no hay visos de integración: tanto en Bremen y Hamburgo como en N. York, 93% de los casos se solucionan exclusivamente atendiendo al derecho nacional (ibid.: 270). Se descarta, pues, el modelo de un Tribunal Europeo de Justicia como una posible solución de jurisdicción multicultural²².

Tomemos ahora el estudio de Yves Dézalay y Bryan Garth (1995) sobre arbitraje mercantil internacional (*International Commercial Arbitration*). Los autores denominan significativamente a los árbitros "mercaderes de derecho" [*merchants of law*] y señalan el papel eminentemente creativo de la puesta en marcha de una nueva *lex mercatoria*²³ en dos generaciones sucesivas de árbitros (1970-1990).

Los temas básicos son: (i) este nuevo derecho adquiere legitimación a partir de la competencia empresarial por la reglamentación de las relaciones económicas; (ii) el arbitraje como un medio de solución alternativa de conflictos se transforma a partir de la competencia por las ventas y la legitimación; (iii) la

regulación internacional se construye a partir de la competencia entre aproximaciones de carácter nacional (ibid. 1995: 28-29).

Como botón de muestra de su auge basta con el siguiente dato. Las primeras 3.000 solicitudes de arbitraje formuladas a la Cámara Internacional de Comercio (IIC) tuvieron lugar entre 1923 -fecha de la fundación de la IIC- y julio de 1976. Las 3.000 siguientes han acontecido entre 1976 y 1987.

El ambicioso proyecto de la Cámara de Comercio de Milán, tal y como lo relata V. Olgiati (1997) va un poco más lejos del *ius mercatorum* original. Se trata ya de la idea de una ciudad autónoma, *universitas mercatorum* cuyo núcleo programático consta de tres puntos: (i) sólo la agregación de variables locales puede "hacer la diferencia" en un proceso de valorización de intercambios económicos orientados a una dimensión global; (ii) sólo una política verdaderamente institucional puede asumir los retos y superar los riesgos y turbulencias de las fluctuaciones socioeconómicas; (iii) los objetivos propuestos no pueden ser basados en una *lex mercatoria* local y casuística, sino en un nuevo conjunto de normas sustantivas cuyo auténtico sujeto es el sistema empresarial. Esta política tiende a promover acuerdos y redes interinstitucionales: "*el objetivo final de la política estratégica de la Cámara de Comercio es crear una nueva relación política entre economía, gobernabilidad pública y sociedad al nivel territorial/funcional, donde la comunidad de negocios pueda actuar propiamente como un (políticamente responsable) agente institucional.*" (V. Olgiati, 1997: 15).

2.5. (iv) Globalización de la economía: pluralismo jurídico

Este tipo de fenómenos son contemplados corrientemente en la literatura especializada como efectos de la "globalización de la economía"²⁴. Es decir, la emergencia de un nuevo pluralismo jurídico de naturaleza transnacional que cambia la situación de los agentes jurídicos en relación a la crisis de los Estados del Bienestar. Dicho de otra manera: la pérdida de soberanía del Estado nacional corre pareja a una internacionalización (y negociación abierta) de los intereses económicos de grandes corporaciones industriales y financieras.

Durante la década de los ochenta, los problemas financieros del Estado del Bienestar propiciaron la reacción global de agentes que actuaban en ausencia de límites jurídico-formales o normativos. A esta situación cabe dos respuestas jurídicas antitéticas pero ambas sustantivas y anti-normativas: (i) el

refuerzo del derecho de las corporaciones a fijar los límites del juego; (ii) el refuerzo de los derechos sociales de participación de la gente en el juego democrático de la toma de decisiones (incluidas las judiciales).

Boaventura de Sousa Santos (1995a, 1995b) ha sugerido recientemente tres metáforas básicas (o *topoi* argumentativos) para la articulación de un "mapa" o "carta" de lo que denomina "derecho posmoderno" en la nueva situación. Se trataría, en suma, de la construcción de un nuevo "sujeto de derecho" de resistencia. Las metáforas propuestas para construir la heterotopía jurídica son: (i) la Frontera (contra todo nacionalismo y positivismo objetivista del derecho), (ii) el Barroco (la exacerbación lúdica de la imaginación para producir efectos jurídicos), (iii) el Sur (espacio de resistencia contra el "epistemicidio" y "lingüisticidio" del Norte).

No resulta extraño que sean precisamente los autores del "Sur" los que incrementen esta línea de resistencia jurídica²⁵. Así, por ejemplo, en el análisis de situaciones político-jurídicas concretas en Colombia, Mauricio García Villegas (1993) ha propuesto el concepto de "eficacia simbólica del derecho", la idea de que *"la incidencia social del derecho depende, en alguna medida, de la capacidad para determinar las conductas por medio de la creación de ideas y no sólo por intermedio de la imposición de sanciones o del otorgamiento de facultades"* (1993: 3). Dejémosle con la fuerza de los ejemplos de normas concebidas sólo para ser promulgadas (241-242):

(1)*"Esto se ve claramente en la situación de estado de emergencia, cuando el gobierno tiene poderes excepcionales para controlar situaciones de orden público. Durante el período de la "guerra contra el narcotráfico", que enfrentó a los gobiernos de los presidentes Betancur y Barco contra las mafias de la droga, se expidieron numerosos decretos que responden al tipo teórico que se analiza. Entre ellos sobresalen aquellos relacionados con el porte de armas y salvoconductos y los de toque de queda en la ciudad de Medellín. Así, por ejemplo, el análisis empírico (...) sobre la eficacia del Decreto 580 del 31 de agosto de 1989, por medio del cual se impuso el toque de queda en la ciudad de Medellín, muestra cómo la intención de contrarrestar la colocación de bombas por parte de los cárteles de la droga fue ínfima en relación con el propósito no declarado de ganar una batalla psicológica en favor de las autoridades locales.*

(2)*En otro ámbito jurídico, el Decreto 943 de 1991 es un ejemplo para ilustrar el modelo performativo. La norma fue expedida con el propósito explícito de controlar el consumo de gasolina por medio de la imposición de una serie de*

restricciones entre las que se encontraba la de prohibir la circulación de vehículos particulares en ciertos días de la semana de acuerdo con el número, par o impar, de sus placas. El decreto fue expedido en medio de una tensa situación de crisis laboral entre la empresa Ecopetrol y su sindicato a propósito de la negociación de la convención colectiva, agravada por numerosos atentados y sabotajes con participación de la guerrilla. Una vez promulgado el decreto se desató una enorme presión contra el sindicato, coadyuvada por el mismo gobierno. El descrédito del sindicato frente a la opinión pública, debido en buena parte a su supuesta vinculación con el movimiento guerrillero, determinó un levantamiento de las 'operaciones tortuga' y una rápida negociación con el gobierno, lo cual impidió la aplicación del Decreto 943. Salió entonces a relucir el objetivo implícito o simbólico que hacía del decreto un instrumento para la creación de una imagen colectiva de descrédito del sindicato, y, por esta vía, un instrumento para precipitar la negociación".

A mi juicio, la idea del "simbolismo jurídico" puede ser desligada de este tipo de situaciones, porque en la situación del pluralismo contemporáneo la idea de "norma" específica y estricta se sustancia o confunde con una idea mucho más general y laxa de "derecho como programa" o "derecho como guía preliminar". Dicho de otra manera: resulta mucho más atractiva la "idea" de derecho que el contenido normativo particular de la regulación normativa, puesto que ésta se alcanza sólo a través de un proceso de negociación y renegociación de derechos que se decantan gradualmente **a partir del proceso social mismo**. Y esto vale tanto para el derecho laboral (marcos colectivos de negociación) y el derecho mercantil (acuerdos negociados, actuación reguladora de las Cámaras), como para el campo del derecho procesal (conformidades o *bargaining process*) e incluso el derecho penal (procesos de mediación y arbitraje).

Resulta indicativo que la investigación sociojurídica reciente haya puesto de manifiesto que la tendencia a "hacerse el derecho uno mismo" o "poner el derecho en las propias manos", a asumir en suma el papel pleno de "sujeto de derechos": (a) produzca un grado de satisfacción mayor que la "representación" en los tribunales; (b) aunque reproduzca algún grado de "formalismo jurídico estatal" precisamente para reforzar el sentimiento de justicia auto-suficiente o auto-regulada²⁶.

Es interesante notar que la tradición en antropología jurídica hace mucho tiempo que está insistiendo en que el proceso de establecer el derecho no es idéntico al resultado "legal" formalmente producido. Pero sólo en la nueva situación de desigualdad de los ciudadanos esto se hace evidente:

especialmente porque resulta más manejable y barato para los poderes locales basar algunas resoluciones y soluciones de conflicto en la propia capacidad ciudadana de interactuar con los propios poderes locales. Esto permite reforzar el control de la policía y los tribunales inferiores, puesto que el "conocimiento local" les permite transformar en calificaciones legales y lenguaje jurídico la descripción de las tensiones, problemas y conflictos²⁷. El proceso de creación de derecho no es pues sólo de arriba-abajo, sino también de abajo-arriba. Se trata nuevamente del problema del control:

"Sostengo -escribe B. Yngvesson (1989: 1709)- que la invención del derecho no es simplemente un proceso unidireccional, sino que emerge en los intercambios y luchas de la gente: en las disputas de vecinos y en las discusiones de enamorados, en la estructuración de las demandas y quejas a la policía, el tribunal, el juez de paz y otras agencias, y en la respuesta de estas agencias a estas demandas. El intercambio es claramente desigual, más aparente en el control ejercido por los oficiales de los tribunales y otros a través de su conocimiento del discurso legal y terapéutico. Los problemas definidos por los usuarios de clase media y trabajadora como 'materia de derechos' pueden ser transformados en 'problemas de detalle' por el tribunal, pero los esfuerzos por usar el tribunal para configurar los problemas locales de desorden pueden también recibir apoyo de diversas maneras por parte de los oficiales, cuya práctica depende de la interacción con la gente del lugar, y cuya legitimidad se basa en parte en conocimiento local".

Si esta es la situación del ciudadano corriente, cabe inferir que quien puede escapar al control estatal en sus diversos grados es el que goza de más poder de negociación y mediación profesional. Otra vez: las categorías de ciudadanos dependen de su capacidad de negociar y renegociar sus intereses con los poderes públicos²⁸. Esta es la situación **no generalizable** de los abogados de élite y empresas transnacionales. Pero también de élites locales que se benefician de la fragmentación de los poderes centrales y de la desigual influencia del proceso de globalización en áreas económicas distintas. Se produce una nueva estratificación de las élites y una nueva redistribución de poder en función de la situación en el mercado primario o secundario. El "pluralismo jurídico" contemporáneo no se centra solamente, pues, como podría creerse en primera instancia, en la confrontación "desde abajo" de comunidades o etnias, sino que vertebra también los distintos sectores de la economía y del estado.

La imagen "simbólica" de un derecho estatal se desarrolla de forma paralela al comportamiento divergente de la defensa de intereses corporativos y financieros: un derecho de acuerdos, negociaciones, estrategias y resolución de conflictos eminentemente oral, que contrasta con los principios clásicos de escritura y documentación de las Administraciones estatales.

Pero lo que resulta más sorprendente es que, al amparo de la expansión de mercados interiores, este tipo de derecho se ha desarrollado **también** y de forma muy notoria en el seno de las propias Administraciones de los estados.

2.6. (v) Administración, desregulación, y gestión pública de los mecanismos judiciales

Permítaseme ahora hacer alusión a una investigación mía (P. Casanovas, 1992, 1994, 1995), con resultados que complementan otras investigaciones anteriores sobre la relación entre la Administración norteamericana y su sistema judicial (C. Warren 1982; L. Friedman, M. Savage, 1988; J.H. Holstein, 1993).

Se trata de la "gestión jurídica" por parte de los profesionales (trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, médicos, gestores) de las decisiones de los tribunales en relación a problemas sociales que atañen a grandes urbes. E.g. la gestión de "poblaciones difíciles" como los *homeless*, alcohólicos y enfermos mentales.

En el nuevo *ius commune*, la Administración norteamericana topa con el problema de la legalidad y las decisiones judiciales. ¿Cómo puede controlar los efectos de los procesos des-regulatorios que producen inevitablemente una regulación más compleja?

Imaginemos una organización de unos cincuenta profesionales, dependiendo de una economía mixta (pública de subsidios-privada de seguros y tratamiento hospitalario), a los que se impone un control judicial. Es obvio que se producirá el intento de convertir el tribunal en función de la organización (y no al revés). Pero, ¿cómo? Creo que la respuesta está en la organización de las actitudes y comportamientos, y en la forma cómo se produce la circulación y control interno del flujo de información.

En el caso estudiado en una ciudad del sur (*LPS Act* del Estado de California), los *lobbies* hospitalarios y la administración local logran un número

altísimo de fallos favorables al tratamiento de *homeless*, alcohólicos y enfermos mentales²⁹. Este tipo de decisiones asegura la posibilidad de aplicación de los planes de "limpieza" de los espacios públicos de la ciudad, a la par que favorece una estrategia expansiva del número de profesionales implicados en la gestión administrativa. Otra vez resulta engañosa la identificación de "profesiones jurídicas" sin relación a las funciones concretas: en este caso hay que contar con un gran número de trabajadores sociales, por ejemplo.

En esta situación cabe distinguir entre:

(i) **sobrelegalización**: uso intensivo de las formas jurídicas tradicionales del derecho [*due process of law*] para la gestión coordinada de colectivos de población por parte de las agencias administrativas;

(ii) **sobreorganización**: predeterminación minuciosa de las funciones, la articulación interna y las actividades coordinadas de los equipos profesionales de las agencias administrativas, en competencia para la distribución de recursos públicos;

(iii) **desjuridificación**: dinámica de funcionamiento efectivamente creada en los tribunales, que restringe y deja finalmente inoperante el mecanismo de apelación y revisión de las decisiones por parte de una instancia superior (no debe confundirse este concepto con el de "desregulación")³⁰;

(iv) **hetero-institucionalización**: dinámica de redefinición del espacio político y jurídico de decisión en función de las tensiones, negociaciones, interrelaciones entre los profesionales interesados (e.g. clínicas y hospitales), los representantes de la Administración Local (*County Administration*), los representantes del *Board of Managers* de la ciudad, y las iniciativas particulares de la *community* (asociaciones civiles, religiosas, familiares...).

Estos son fenómenos colectivos de articulación social. El control de la información que le llega al juez por parte de agencias administrativas mixtas -no presentes en el organigrama de *Social Services* del condado- explica el misterio de cómo es posible que el juez encargado de controlar los servicios sociales del tutor LPS (*Mental Health*) resulte a la postre "neutralizado" por éstas, y acabe asumiendo el papel de productor de legitimación para las actuaciones administrativas. El hecho estriba en la libre circulación de dinero público para incentivar mercados privados y promover el control informal del mercado por medios formales. La relación entre Administración de Justicia, gobierno de la ciudad y clínicas privadas de distinto nivel pivota sobre la paradoja de la **re-regulación por desjuridificación**. Como solía decir el juez encargado de la aplicación del Welfare and Institutions Code que reglamenta el *LPS Conservatorship*: "*basta con que sepan que yo estoy aquí*".

2.7. (vi) La "implosión" de derechos

"Implosión" es el término más corrientemente utilizado para describir el desplome de la estructura económica y política de la antigua URSS y de los países bajo su influencia (K.A. Ziegert, 1996). También es corriente describir las incruentas reacciones populares como *velvet revolutions*, "revoluciones de terciopelo". Ha sido utilizado asimismo -como ya he descrito- para denominar los fenómenos relativos al incremento de abogados y su relación con la creación de nuevos mercados financieros del capitalismo "relacional".

Propongo utilizar también el término para describir la estructura fragmentaria de derechos que son supuestamente asignados a nuevos los nuevos sujetos **simbólicos** de derechos y obligaciones. Propongo el término "implosión" porque, de hecho, es la vieja estructura normativa de derechos, principios y obligaciones adscritas a sujetos formalmente iguales ante la ley la que se ha desplomado. Si la situación es la que ha sido descrita, si la litigación ante las Administraciones de Justicia estatales y ante los organismos internacionales está sufriendo la crisis del Estado de Derecho y el auge de nuevas formas inesperadas de desjuridificación y rejuridificación, entonces el simbolismo, la imagen, la sombra de lo que fue puede ejercer una presión cierta sobre el imaginario y las expectativas de los nuevos ciudadanos del mundo (excluidos o incluidos en el desarrollo de las sociedades occidentales).

Creo que es a este nivel que M. Castells (1997) habla de la reacción violenta de la "exclusión de los excluidos" y del "poder de la identidad" relativo a los mecanismos de creación, por ejemplo, de una nueva imagen de posibilidades para el sujeto femenino. Porque son efectivamente los mecanismos de creación de una identidad cultural y colectiva los que están operando en la "implosión de los derechos humanos" en distintos colectivos: (i) género; (ii) inmigrantes; (iii) comunidades religiosas; (iv) comunidades étnicas; (v) comunidades nacionales.

Otra vez, lo viejo resulta nuevo: el desprendimiento del mundo simbólico no se efectúa por una sustitución de imágenes o ideas, sino más bien por una recomposición de lo ya conocido.

Obsérvese que el espinoso asunto de la identidad se proyecta normativamente en un "mercado de futuros" particular que configura una imagen totalmente distinta según la posición de quien esté soñando: la Cámara de

Comercio de Milán o los fundamentalistas radicales argelinos. Pero en el fondo, la integración o el rechazo se produce de igual modo: mediante la polarización distribuida de un horizonte fragmentario en el que la situación local o particular se percibe en una serie de contextos cerrados o abiertos de actuación posible. No se puede ignorar lo que se sabe: la presencia de los *mass media* asegura la reproducción casi mecánica de los clichés del "sentido común contemporáneo"³¹.

Es una constante del trabajo de Dézalay y Garth la insistencia en que el mercado profesional del derecho no se configura solamente al nivel de bienes, opciones, servicios o dinero, sino que opera también a otro nivel: **el de la definición del marco de categorías utilizables para calificar la situación y escoger el curso de actuación posible**³². La diferencia aquí estriba enteramente -siguiendo el vocablo de Bourdieu- en el "capital social" o "simbólico" capaz de realizar, imponer, negociar, marcos de decisión. "*La hipótesis es que los diferenciales en capital social explica la posición de los abogados en el mundo social*" (Y. Dézalay; B. Garth, 1997: 128).

De manera que **no** se produce realmente una contraposición entre Estado de Derecho y las nuevas formas del derecho contemporáneo basadas en las relaciones personales, empresariales y organizativas (ibid. 1997). Las élites educadas en las grandes escuelas de Administración y de Derecho aprenden a escoger uno u otra línea de acción, a definir uno u otro marco, a saber cuándo hay que negociar y cuándo se puede utilizar el derecho estatal en beneficio propio.

Los fragmentos del lenguaje jurídico clásico proporcionan el material adecuado para efectuar el *collage*. Esta es una de las razones del resurgimiento contemporáneo del lenguaje y las actitudes retóricas en los tribunales, mediaciones y arbitrajes. Pragmática y análisis del discurso de los comportamientos verbales y no verbales de los profesionales pueden arrojar luz sobre el por qué de la eficacia de los sorprendentes cambios de registro entre lenguaje técnico y coloquial (*code-switching*) que se observan en las conformidades, informes ante jurados y negociaciones entre profesionales³³. Creo que el tema de la composición del aparato técnico de las relaciones entre cultura jurídica profesional y académica aún no ha sido bien situado en el contexto de la crisis del estado y el surgimiento de mercados. Se trata probablemente de una cultura "híbrida", "segmentada", adecuada a la especificidad de ámbitos profesionales translocales.

3. DE UN MODELO NORMATIVO A UN MODELO ORGANIZATIVO DEL DERECHO CONTEMPORÁNEO

3.1. Algunas contraposiciones iniciales

Los puntos anteriores (i-vi) implican cambios profundos en la estructura jurídica de las sociedades contemporáneas.

A la luz de los datos, creo que ya no es posible seguir manteniendo la idea de un mundo jurídico autónomo, explicable a partir de modelos propios de la filosofía del derecho clásica. Y así lo han reconocido autores provenientes de distintas tradiciones de historia y sociología del derecho.

Donald Black (1989: 19) se muestra taxativo al respecto:

"Lo que ha aparecido en estos últimos años no es meramente una nueva versión de la sociología jurídica, sino una nueva concepción del derecho mismo. El modelo sociológico del derecho difiere radicalmente del modelo jurídico [jurisprudencial] -o de los letrados- que ha dominado ampliamente el pensamiento jurídico en el mundo occidental".

Black (1989: 21) efectúa esta sencilla síntesis:

	<u>Modelo jurídico</u>	<u>Modelo sociológico</u>
Foco	Reglas	Estructura social
Proceso	Lógica	Comportamiento
Alcance	Universal	Variable
Perspectiva	Participante	Observador
Propósito	Práctico	Científico
Objetivo	Decisión	Explicación

Nótese que la contraposición entre un "modelo jurídico" basado en reglas, y un modelo de "justicia sociológica" no se resuelve fácilmente con una separación de campos. Por decirlo así, las intuiciones sociológicas de los profesionales del derecho son más importantes que el modelo jurídico que creen aplicar cuando actúan. Lo que hacen va mucho más allá de lo que dicen que hacen o de lo que creen que están haciendo.

El historiador del derecho A.J. Arnaud (1996), recuperando la orientación comportamental y estratégica de científicos sociales como Herbert A. Simon y J.L. Lemoigne, apuesta por el cambio a una epistemología de la complejidad, con modelos problemáticos, contrapuesta a una epistemología de la simplicidad. Debo añadir que si esta epistemología es seriamente asumida, los sistemas de descripción lineales deben ser sustituidos (o por lo menos complementados) por sistemas no lineales (Casanovas, Ardèvol, Mach, 1998)³⁴, y que -siguiendo la propia crítica de Simon (1969: 133-134) al uso de lógicas imperativas para el diseño de modelos en ciencias sociales- no puede mezclarse el análisis de datos empíricos con el de "sentidos" normativos. Debe abandonarse la descripción según "normas" o "sistemas de normas". A menos, claro está, que no nos importe aumentar innecesariamente la población mundial de jirafas³⁵.

Los polos del derecho contemporáneo podrían ordenarse, según Arnaud (1996), del siguiente modo³⁶:

- (1) Policentricidad vs. monocentricidad
- (2) Multiculturalismo vs. etnocentrismo
- (3) Juridicidad vs. legalismo
- (4) Normalidad vs. normatividad
- (5) Identidad plural vs. identidad singular

La particular situación española comparte y al mismo tiempo difiere de estos rasgos.

Creo que la diferencia más importante es la siguiente. Muchos autores contemporáneos -entre los que se encuentran Black y Arnaud- suponen implícitamente que lo que ha sucedido en los derechos de tradición anglosajona y continental es una paulatina **socialización**, naturalmente adicional a la crisis del Estado del Bienestar de la mano del desarrollo de la economía de mercado. Así, la vieja contraposición entre Estado y sociedad, entre funcionarios de la Administración de Justicia y profesionales del derecho, se mantiene.

Pero los datos disponibles del proceso de transición española nos indican otra cosa, puesto que aquí nunca se había completado en España la creación de un Estado moderno.

Dicho de otra manera, han sido los profesionales del derecho **desde el interior mismo de la Administración del Estado** los que han reaccionado (i) contra las graves deficiencias de sus condiciones de trabajo, (ii) a los problemas sociales de la justicia, mediante planteamientos novedosos que **no** se hallaban

en la ley (P. Casanovas, 1997). Si esto es así, no se sostiene ninguna de las versiones de la contraposición taxativa entre perspectivas "formales" e "informales", "modernas" y "postmodernas" del derecho.

Este tipo de contraposiciones son inicialmente válidas para llamar la atención en un plano general sobre los cambios acaecidos, pero -como muestran los casos de las sociedades en transición- no pueden elevarse a modelos sin riesgo de pérdida de capacidad explicativa. Otro modo de decir lo mismo es indicar que un "paradigma" no es un modelo (ni un conjunto de modelos): creo que una vez percibidas las diferencias hay que explicarlas de otro modo. La descripción por "paradigmas" no pertenece a las ciencias sociales, sino a la filosofía de la historia.

3.2. Palabras finales: hacia un modelo organizativo del derecho

Ha sido ya observado en la literatura especializada que los fenómenos propios de la globalización afectan también al cambio de enfoque de las ciencias sociales³⁷. R. Axelrod (1997) ha construido recientemente un modelo de simulación para el cambio cultural con el supuesto explícito de respetar la correspondencia local y la polarización global de la cultura. Hay una percepción común en el intento de comprender esta nueva y sorprendente articulación que une aproximaciones al derecho a primera vista muy distantes entre sí: semióticas (B.S. Jackson 1994), discursivas (J. Habermas, 1996), sistémicas (G. Teubner, 1996, 97), comunicativas (D. Nelken, 1996), institucionalistas (O. Weinberger, 1996) y neoinstitucionalistas (W.W. Powell, 1997), entre otras.

Existe una tarea por hacer al respecto consistente en la comparación y aclaración de los instrumentos metodológicos y aportaciones teóricas en este campo. Voy a sugerir, por mi parte, una posible línea de trabajo.

En la meditada respuesta que escribe a las fundadas críticas de M.C. Suchman y L.B. Edelman (1996), W.W. Powell (1996: 961) identifica tres grandes ámbitos para el desarrollo de la intersección entre derecho y teoría de las organizaciones:

"(1) El derecho se practica en espacios organizativos que configuran su conducta; (2) el derecho se desarrolla en lugares poblados por múltiples jurisdicciones organizativas, con pretensiones competitivas de especialización profesional; (3) el derecho sirve al mismo tiempo como contexto normativo y regulativo en cuyo interior operan las organizaciones".

Estos ámbitos pueden constituir puntos de partida para situar el conocimiento empírico sobre las nuevas formas jurídicas. A condición de que se lleve el análisis más lejos: a las formas cognitivas y estructuras de interacción que mediatizan los procedimientos culturalmente "híbridos" de los nuevos procesos de decisión.

Quizás de esta forma pueda reconstruirse el actual vacío que aparece entre las aproximaciones micro y macrosociológicas a las formas sociales del derecho.

En la nueva *Cancania*, por utilizar la divertida metáfora múltiple con la que M. Warglien y M. Masuch (1996: 1 ss.) denominan a los desarrollos de la *garbage can theory*, hay elementos para articular algunos modelos concretos sobre la diseminación y comunicación del conocimiento intra- e inter-organizativo.

"Una mirada más precisa revela que la vida en Cancania está configurada bajo tres grandes condiciones. En primer lugar, las preferencias son ambiguas y poco claras; los fines están mal especificados e incompletos, tanto al nivel individual como organizativo. La gente no sabe exactamente lo que quiere, y lo que quiere está sujeto a reinterpretación, y lo que querrán aún deben aprenderlo. Si los fines son confusos, los medios no lo son menos. Las vías para llevar la acción a cabo son vagos y mal entendidos. Hay poca comprensión de qué causa conducirá a qué efecto. Además, incluso la dirección del vector consecuencial puede ser invertida a veces: las acciones pueden general ex post sus motivaciones, las soluciones pueden buscar activamente algún tipo de problema. Finalmente, los cancanianos participan de forma errática en procesos de elección. Tienden a vagar dentro y fuera de los espacios de decisión, al hilo de demandas conflictivas acerca de su atención y tiempo".

Quizás también vaguemos actualmente dentro y fuera del estado y de los despachos de abogados con la misma determinación. Dicho con alguna exageración, esta situación es la habitual en la vida cotidiana. Y quizás antes de intentar cualquier generalización teórica, debiéramos lograr buenas descripciones de fenómenos concretos en modelos locales.

No me refiero aquí a la puntual identificación de estos fenómenos: la exposición anterior muestra que los investigadores en derecho y sociedad ya los han localizado de manera razonablemente satisfactoria. Me refiero a lograr

modelos **transversales** y **translocales**. Es decir, (i) modelos que integren conocimiento sobre la invención de usos del lenguaje y formas de razonamiento en el interior de organizaciones e instituciones concretas, y (ii) modelos que, al mismo tiempo, muestren de qué manera las formas de cognición se forman, rearticulan y reutilizan interna y externamente en las redes organizativas del estado y las empresas contemporáneas, con un efecto de retroacción sobre éstas.

Obsérvese que, de este modo, el "derecho" deja de ser focalizado para plantear en su lugar como problema el "orden" interno de este haz de metáforas "jurídicas" que estructuran el mercado y los centros de decisión y de poder. Quizás así salgamos finalmente, en el siglo XXI, del siglo XIX.

NOTAS

¹. He tenido ocasión de discutir previamente estas ideas en el marco del curso organizado por J.J. Toharia en la Universidad Autónoma de Madrid (1995) sobre profesiones jurídicas, con la participación de L. Friedman, A. Garapon y R. Pérez-Perdomo. Posteriormente, tuve oportunidad de discutir nuevamente el caso español en el marco del *workshop* organizado por J. Brigham en el IISJ de Oñati, en marzo de 1997. Agradezco al Instituto de Sociología Jurídica de Oñati -tan importante para nosotros- el marco y la atención que presta para el desarrollo de este tipo de trabajo. A.J. Arnaud, Y. Dezalay y V. Olgiati han contribuido especialmente a que mis errores no sean mayores. Y, naturalmente, los aciertos no son nunca individuales. Sin mis compañeros del *Grup d'Estudis Socio-jurídics UAB (GRES)* estas reflexiones no hubieran sido posibles. Pese a ello, este artículo no pretende ser teórico: es solamente la versión preliminar de un trabajo más extenso y a medio cocer. Sin el interés e incentivo de Isidre Molas al proponer el marco del *Institut de Ciències Polítiques i Socials* de Barcelona para su discusión, este artículo no hubiera probablemente visto la luz.

². "La globalización -escribe R. Abel (1995b: 12)- conmuta la actividad económica desde el interior de los estados a sus intersticios o a través de sus límites externos, donde no hay reglas o éstas son nuevas y poco claras".

³. B.S. Tamanaha (1997), J.H. Schlegel (1997). Hay que matizar esta afirmación, puesto que los realistas constituyeron un grupo muy amplio de investigadores, juristas y científicos sociales. Puede defenderse, sin embargo, que los iusrealistas más significativos -Llewellyn, Frank...- intentaron la integración de resultados de las ciencias sociales, pero permanecieron en la construcción de una determinada visión interna a los estudios jurídicos. Vid. P. Casanovas (1996, cap. 17).

⁴. La historia reciente y la subsiguiente valoración crítica del denominado *Law & Society Movement* está aún pendiente. "La tradición de Derecho y Sociedad -escriben Marck C. Suchman y Lauren B. Edelman (1997: 907)- es en sí misma una perspectiva institucionalista en el sentido más amplio del término. En contraste con el 'formalismo jurídico' los investigadores de Derecho y Sociedad describen el derecho como una institución social cultural y estructuralmente incorporada". La historia interna escrita con motivo de sus veinticinco primeros años muestra la actitud activista de sus inicios y su vocación de intervención en políticas e instituciones públicas. La "idea de derecho y sociedad" -tal como la denomina D. Trubek (1990: 5 y ss.)- es que el derecho "es un objeto que puede ser estudiado por las ciencias sociales" y que, como tal, debe ser reconstruido por ellas. El problema, sin embargo, es que esta reconstrucción debe elaborar al mismo tiempo un lenguaje capaz de dialogar o, en su caso, transformar con éxito las formulaciones jurídicas tradicionales basadas en reglas y sistemas normativos. Que yo conozca, este aspecto del lenguaje técnico no ha sido aún bien tratado, puesto que requiere una reflexión analítica ulterior sobre la transformación interna del lenguaje dogmático a la luz del rápido desarrollo de las prácticas profesionales. Pueden hallarse indicios en D. Trubek, Y. Dezalay, R. Buchanan, J.R. Davis (1994); en A.J. Arnaud y M.J. Fariñas (1996), y en A.J. Arnaud (1998). Para una explicación retrospectiva del movimiento en el ámbito de la sociología británica, véase los artículos reunidos en D.J. Galligan (1995) sobre el *Oxford Centre for Socio-legal Studies*.

⁵. P. Casanovas (1998a, 1988b). Obsérvese que esta posición defiende la imposibilidad de efectuar con sentido análisis textuales o discursivos sin efectuar al mismo tiempo un análisis de las variables contextuales que constituyen límites o guías [*constraints*] para los procesos cognitivos.

⁶. Obsérvese que una interpretación rigurosa lleva a la aparente paradoja de renunciar a la construcción o reconstrucción de ningún "objeto jurídico" para estudiar el derecho contemporáneo. M. Castells (1971: 59) observó algo parecido respecto a la inespecificidad de la "sociología urbana" al examinar cuidadosamente el tema.

⁷. M. Castells (1997: 207) especifica que "dentro de las redes, las empresas japonesas establecen una lógica comunitaria; las coreanas, una lógica patrimonial; y las taiwanesas, una lógica patrilínea". La relación con Tampoco es posible considerar el estado, en general: "considero que la regionalización interna es un atributo sistémico de la economía informacional/global. Ello es debido a que los estados son la expresión de las sociedades, no de las economías. Lo que resulta crucial en la sociedad informacional es la interacción compleja entre las instituciones políticas con bases históricas y los agentes económicos cada vez más globalizados" (ibid. 128). J. Flood (1995: 145) ha insistido en los límites culturales del proceso de globalización. Es mejor entender este proceso no como algo acabado, sino como un conjunto de tendencias que son culturalmente articuladas en comportamientos específicos capaces de originar tensiones, retrocesos y nuevas dinámicas. Esto es particularmente evidente en el distinto comportamiento y organización de la cultura profesional de las empresas de abogados internacionales.

⁸. Utilizo el término "cultura jurídica" en el sentido específico de las pautas que guían las creencias, prácticas e inferencias de razonamiento de los profesionales dentro de organizaciones y rituales que ocurren en un contexto más general (en una lengua, instituciones y aprendizaje concretos). Mi uso del término difiere tanto del concepto más amplio asentado en la tradición filosófico-histórica italiana de G. Tarello y P. Rossi como del sociológico de L. Friedman. Friedman entiende el término en una multiplicidad de variantes de un núcleo

esencial: "ideas, valores, expectativas y actitudes hacia el derecho y las instituciones jurídicas" (1996: 34), como "imagen e incentivo, en las mentes de los miembros de algún público" (L.M. Friedman, H.N. Scheiber, 1996: 1). Recientemente R. Cotterrell ha objetado que el ámbito semántico del término no refiere a variables mensurables, sino a un "tipo ideal" para el estudio de la ideología jurídica: "el concepto es más útil por su énfasis en la aguda complejidad y diversidad de la matriz social donde existen los sistemas jurídicos estatales contemporáneos" (1996: 29). E. Blankenburg (1997) ha expresado reservas parecidas en relación a las dificultades de cuantificación. Sin embargo, que el término es útil para la construcción de variables no puede discutirse: la diferencia entre cultura jurídica "interna" (propia de los profesionales) y "externa" (propia de la población) es la base de gran parte de las encuestas de opinión elaboradas por J.J. Toharia desde 1974, por poner un ejemplo. Creo que la discusión está en otra parte: en la descripción de las reglas, pautas y mecanismos concretos de lenguaje y razonamiento elaborados por un grupo profesional especializado y el impacto social que estos mecanismos tienen. Situar la discusión en este nivel implica la exigencia de analizar los procesos de cognición y el uso del lenguaje de la forma más precisa posible. Obsérvese que no doy por descontado que estos mecanismos operen siempre por representación consciente. Vid. para un intento de establecer una tipología más amplia de "culturas jurídicas" aunando la perspectiva histórica con la sociológica, W. Heydebrand (1997).

9. La "flexibilidad" cumple una "función útil como concepto organizativo para una variedad de análisis de procesos y influencias en el comportamiento de resolución de conflictos" (D. Druckman y Ch. Mitchell, 1995: 11): compromisos mutuos, negociación de diferencias, cambio de posiciones, concesiones estratégicas, invención de nuevos procedimientos... Se trata de una perspectiva que subraya la importancia de un entorno y de un tipo de organizaciones con una gran capacidad de variación y cambio. T. Hopmann (1995) distingue entre dos tipos de "paradigmas" teóricos distintos para estas situaciones: (i) negociación, (ii) resolución de problemas; O.J. Bartos (1995), a su vez, distingue entre procesos negociadores "integrativos" y "distributivos". Lo que aquí se sugiere es que, cada vez más, los modelos teóricos contruidos para dar cuenta del derecho contemporáneo deben contemplar los cursos de comportamiento posible de sus actores si pretenden tener algún valor descriptivo o explicativo.

10. Para un análisis de la situación española, véase J.J. Toharia (1987, 1994, 1997); S. Pastor (1993, 1995, 1997), y P. Casanovas (1997).

11. Razones como éstas han movido a R.L. Abel y P.S.C. Lewis (1988, 1995) a no comprender su trabajo dentro de la denominada "sociología de las profesiones". Prefieren señalar las diferencias como "sociología de los abogados" y centrar en ella la "sociología del derecho" (1995: 317).

12. Ha sido repetidamente señalado el hecho de que el derecho continental (*civil law*), más centralizado y organizado por un estado, ha desarrollado muchas más categorías de profesiones jurídicas que el *common law*. A pesar de la complejidad del proceso, en éste bastan las categorías de juez, abogado y abogado del foro. No existe la multiplicidad de figuras distintas -secretarios, procuradores, notarios, registradores, *avoués*...- tradicionalmente requeridos en Francia, Italia, Alemania y España. Esta, entre otras razones, ha llevado a M. Galanter, H.N. Schreiber y L.M. Friedman (1996) a rechazar la idea que se esté produciendo un proceso "especial" de "americanización" del derecho continental. La simplificación de las prácticas y el poder de los abogados se debe, en cambio, a la crisis del estado y al propio proceso organizativo del desarrollo económico y político del mercado. En el mismo sentido, J. Flood (1996).

13. Para un estudio comparativo de Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, vid. B.S. Markesinis (1990). La comparación es difícil debido al número de submodelos concretos existentes. Así, e.g., resulta que "el derecho de daños en Estados Unidos no es un sistema, sino diversos sistemas con figuras, modelos e incluso reglas distintas que se aplican a cada subcategoría" (ibid.: 274).

14. Existe acuerdo sobre el papel fundamental de los abogados en el mantenimiento del sistema contradictorio en Estados Unidos, y en la expansión de los mercados internacionales (tanto primarios como financieros). R.A. Kagan (1994) ha mantenido una causalidad de segundo orden respecto al primer punto: las tácticas y estrategias agresivas de la profesión norteamericana causan indirectamente el mantenimiento del sistema de resolución de conflictos. D. Cohen-Tanugi (1985) mantiene para Estados Unidos el argumento de Tocqueville: la descentralización y gobierno locales precisan profesionales especializados. J. Flood (1995, 1996) ofrece datos comparativos de tamaño y ocupación de las grandes firmas británicas, y argumenta que el proceso de concentración ha seguido el ritmo de internacionalización de los mercados de N. York, Londres y Tokio. R.A. Abel y P.S.C. Lewis (1995: 283-284) han sintetizado los mecanismos directos de configuración de la economía por los abogados: (i) consumen excedentes; (ii) intervienen en los intercambios de bienes, trabajo y capital; (iii) parecen acelerar la concentración de recursos económicos (tierra, capital, trabajo) al potenciar el poder económico realmente existente; (iv) redistribuyen riqueza al intervenir en los conflictos sobre la propiedad y en la competición por los mercados y por el control corporativo. Sobre el papel creciente del conocimiento del derecho internacional privado en los procesos de globalización y la distinta consideración jurídica interna de Estados Unidos, Inglaterra y Japón, vid. A. Pardiek (1996), D.P. Wood (1994). Sobre la creciente mercantilización de los profesionales en el mercado financiero son fundamentales los estudios de Y. Dezalay (1992, 93, 95, 96) y Y. Dezalay y B. Garth (1992, 1996); sobre el papel de las

cámaras de comercio, V. Olgiati (1996, 1997); sobre litigación internacional en sedes nacionales, V. Gessner (1995, 1996a, 1996b).

15. *Ius commune* debe entenderse aquí como una metáfora alusiva a la forma interactiva, organizativa, corporativa y oral del derecho. En puridad, el término designa, como es sabido, a la "mezcla compleja y variable de costumbres locales, de derecho feudal, de derecho romano, de derecho canónico y de derecho comercial" que constituyó la base para el derecho municipal desde los siglos XII al XVI (A.J. Arnaud, 1998: 64-65).

16. Dejaré para otra ocasión la formulación de una hipótesis específica para nuestro país: en la transición española, la reacción del derecho a los graves problemas y deficiencias organizativas de la Administración de Justicia no proviene del legislativo o de la función de los partidos políticos, sino que se da simultáneamente por la labor de adaptación y creatividad de los profesionales **en cuanto miembros de la sociedad civil** (y no en cuanto funcionarios o miembros de la Administración del Estado). Faltan aún estudios concretos que especifiquen el alcance de esta hipótesis preliminar y la concreten según zonas, colegios profesionales, estratificación social... Pero los datos disponibles parecen apuntar a esta interpretación que tiene en cuenta los cambios generacionales. Para una justificación más pormenorizada, véase P. Casanovas (1997).

17. No me resisto a citar el relato de la visita a la Universidad Complutense de Madrid de un profesor de derecho internacional de Harvard, David Kennedy, a principios de los noventa, para abrir un Colegio Español en Harvard. *"Era una época excitante para visitar España. Parece que el proceso nacional de renovación había puesto en movimiento una dramática circulación de élites (D.K.). Esto resultaba más evidente como un fenómeno generacional: gente relativamente joven parecía hacerlo funcionar todo. Había nuevas oportunidades de hacer carrera en los negocios y en la administración, muchas aparentemente abiertas para la clase media educada. Había un nuevo status al salir al extranjero, trabajar para una compañía extranjera, estudiar en una universidad extranjera, aprender sobre derecho europeo. Había nuevas vías para la educación -escuelas empresariales y escuelas privadas de derecho emergiendo más allá de las universidades públicas. Una nueva sensibilidad por los negocios agrupaba a una moderna élite comercial, desenvuelta sobre asuntos internacionales, de sentimientos liberales, conservadores en gestión fiscal"* (D. Kennedy, 1993: 227). Este relato sobre las élites debe ser equilibrado, naturalmente, con las nuevas dificultades "por abajo" de multitud de jóvenes abogados que ven cómo su período de formación se alarga notablemente debido a las dificultades de acceso a la profesión. Pero unos y otros se ven abocados a una competencia antes desconocida y no resulta insensato suponer que sus actitudes profesionales deberán adaptarse a ella.

18. E. Blankenburg se muestra tajante al respecto: *"la 'cultura jurídica' es tanto el producto del sistema como su generador: pueden existir muchas expectativas normativas en relación al público general, pero no hay 'cultura jurídica' al margen de las instituciones jurídicas existentes"* (1997: 65). Las tasas de litigación son, pues, en su mayor parte, institucionalmente inducidas.

19. En 1990, el número de delitos penales por 100.000 habitantes en Japón era sólo de 1.324. Compárese los 8.630 en Inglaterra y Gales, 7.108 en Alemania y 5.820 en Estados Unidos (S. Miyazawa, 1997: 195).

20. Vid. también sobre el caso de Japón, E. Feldman (1997a, 1997b), M. Murayama (1997), M. Chiba (1997). A pesar de las diferencias de visión, hay acuerdo general respecto a la flexibilidad y adaptabilidad de la cultura japonesa -*amoeba-like situationism* en términos de M. Chiba (1997: 103)- a una concepción más individualizada del derecho.

21. *"Las revoluciones en las telecomunicaciones y la micro-electrónica han hecho posible lograr acuerdos de forma más amplia, estructurarlos de forma más compleja, diseñarlos para necesidades específicas con mayor precisión que antes, y entrar en más operaciones comerciales en el mismo período de tiempo. Todos estos cambios tienen el efecto de incrementar lo que puede ser denominada la 'base transaccional' de la economía. Las turbulencias económicas y los cambios en las estructuras de competición -en parte ocasionados por las nuevas tecnologías, en parte por la entrada de nuevos competidores- pueden ser pensados de forma natural como 'interfiriendo' las estructuras del 'gobierno' informal existente en la economía, conduciendo de forma natural a los actores hacia los mecanismos más formales previstos por la ley de obligar el cumplimiento. [...]. Considerar seriamente las explicaciones alternativas sugiere, sin embargo, que no es este el caso"* (T. Dunworth, J. Rogers, 1996: 560-561).

22. Pese a ello, no es extraño que la reacción de los jueces ante la nueva situación haya conllevado también un mayor repliegue y concentración en los principios jurídicos y en la defensa del "Estado de Derecho". En mi juicio, sin embargo, el activismo judicial desplegado no tiene que ver con una "politización de los jueces", sino con una reacción un poco más compleja de percepción difusa de las nuevas prácticas mercantiles, políticas y empresariales. La lectura de Antoine Garapon, él mismo magistrado, es significativa: *"Los franceses se han dado cuenta progresivamente que su democracia estaba basada en la administración y la política más que en el derecho, en contraste con la cultura anglosajona"* (1995: 505). La pérdida de control estatal, a la par que la percepción de desigualdades crecientes, ha llevado a una reacción contra los excesos que ha sido

denominada "corrupción". La denominación tiende a esconder el hecho de la criminalidad estructural no eliminable en el ámbito de los mercados globalizados. Se trataría, en todo caso, de una "judicialización de la política", pero como advierten para Italia C. Guarnieri y P. Pederzoli: "*judicializar la política significa en realidad dar siempre más poder a quien no puede ser sustituido*" (1997: 158).

23. "Lex mercatoria" es un término que designa el conjunto de principios comunes para la regulación del tráfico internacional. Corresponde, sin embargo al trabajo académico propio de la primera generación de árbitros y mediadores internacionales. La situación en los noventa ya va un poco más allá: cada caso es revisable a la luz de los intereses de los actores (Y. Dezalay, B. Garth, 1995). Es un nuevo *ius commune* de carácter "relacional" y "flexible".

24. En este campo, la literatura es demasiado extensa y bien conocida como para efectuar citas específicas. Véase, sin embargo, M. Castells, P. Hall (1994) sobre la concentración urbana de productores de tecnología; M. Castells (1996-97) sobre el cambio global; T. Faist (1995) sobre migraciones de población; M. Galanter (1995) sobre el cambio jurídico; W. Grant (1993) y A. Mol, D. Lieffering (1993) sobre estrategias corporativas e impacto medio-ambiental; F. Halliday (1997) sobre problemas de gobernabilidad; M. Hampton (1995-96) sobre desarrollo económico y corrupción; P. Bernasconi (1996) sobre estrategias bancarias y blanqueo monetario; A. Pardiek (1996) sobre el cambio de funciones de los abogados; D. Trubeck, Y. Dezalay, R. Buchanan, J.R. Davis (1994) sobre la creación de nuevos campos jurídicos internacionalizados; K.A. Ziegert (1996) sobre la transformación jurídica de los países del este.

25. Para una formulación distinta, más centrada en las concepciones liberales de "gobierno" y "sociedad civil", vid. R. Pérez-Perdomo (1996).

26. Véase el reciente estudio de Roselle L. Wissler sobre *Small Claim Courts* (menos de 1.200\$) del área metropolitana de Boston (Mass.) para el primer aspecto (1995: 355); y, para el segundo, entre otros muchos, el clásico estudio de Sally Engle Merry (1979) sobre el "modo de solucionar disputas vecinales" mediante el uso no-jurídico de los tribunales.

27. J. Conley y W. O'Barr (1989) han estudiado el tipo de planteamiento usual en los tribunales norteamericanos inferiores. Los autores sostienen la existencia de un lenguaje de relaciones "concreto" por parte de los demandantes y demandados, cuyo uso afecta la aplicación de reglas más abstractas por parte del tribunal en función del dominio mostrado por éstos.

28. Esto resulta consistente con algunos estudios sobre la correlación entre efectividad de las medidas de acciones colectivas (en barrios, asociaciones...) y status y nivel de estudios y educación. "*Cuanto más alto sea el status socioeconómico del vecindario, más alta la percepción de que los residentes son conscientes de los temas locales, están bien organizados, solucionan los problemas mayores que afectan a la zona, y que la asociación es capaz de influir en el gobierno local*" (G.S. Mesch, K.P. Schwirian, 1996: 477).

29. El estudio se realizó durante todo el año 1990. Vid. las estadísticas concretas sobre 776 casos (3 meses) en P. Casanovas (1992). En el 99,3% de casos sobre una población total de unos 3.000, el tribunal decidía a favor de la asignación de tutor. Los abogados de oficio pugnaban en realidad por los derechos civiles que, esta situación, podía retener el tutelado: derecho de voto, derecho de conducir, de tomar decisiones médicas relacionadas o no con su propia enfermedad, de portar armas.

30. Hay que distinguir "desinstitucionalización" (el movimiento de excarceración de presos, enfermos, alcohólicos y enfermos mentales de las instituciones estatales que empezó en Estados Unidos a mediados de los cincuenta), "desregulación" (las prácticas y técnicas de desarrollo de la intervención estatal en economía -derecho "reflexivo"- que otorga un mayor protagonismo a los actores sociales y económicos), y "re-regulación" (los intentos parciales de establecer acuerdos regulatorios en determinados sectores, con o sin intervención estatal). Cfr. M. Calvo García (1998).

31. Es de observar que la información ajustada sobre los temas jurídicos no siempre es correcta. Los estudios existentes muestran una distorsión de imagen que revierte sobre la opinión pública. Esto es lo que han descubierto D.S. Bailis y R.B. MacCoun (1996) respecto a jurados, número y estimaciones económicas del derecho de daños en su examen de las revistas *Time*, *Newsweek*, *Fortune*, *Forbes* y *Business Week* (1980-1990).

32. Y. Dezalay, Bryant Garth (1996, 1997); Y. Dezalay (1995). Así, para el estudio de los árbitros y mediadores internacionales "*las claves analíticas que ligan a los individuos a los análisis son: (1) relacionar individuos y sus estrategias personales -no siempre reconocibles por ellos mismos- con la estructura del campo del negocio de los conflictos; y (2) relacionar los conflictos y la competencia con el terreno del 'capital simbólico' poseído por los individuos quienes, dependiendo de sus posiciones en el campo, compiten en nombre de su educación, experiencia, y sus conexiones profesionales y sociales*" (Y. Dezalay, B. Garth, 1996: 293).

33. En los registros audiovisuales de sesiones formales e informales en los tribunales efectuados por el GRES (*Grupo de Estudios Sociojurídicos UAB*) se observa que los cambios de registro de la cultura profesional son muy rápidos y constantes. Es fácil percibirlos en la observación diferida, pero suelen pasar desapercibidos en la observación participante e incluso en la observación directa. P. Casanovas (1998); M. Poblet (1997), E. Ardèvol (1998).
34. Un sistema lineal es un "*sistema cuyas alteraciones de un estado inicial producen alteraciones proporcionales en estados subsiguientes*". Un sistema no lineal es un "*sistema cuyas alteraciones de un estado inicial no producen necesariamente alteraciones en estados subsiguientes*" (E. Lorenz, 1993:205).
35. H.A. Simon no niega la "necesidad" o "innecesariedad" de la lógica modal misma, sino solamente su pertinencia epistemológica para la descripción y explicación de hechos sociales. "*Puede mostrarse que la lógica modal existe -escribe Simon (1969: 134)- de la misma manera que las jirafas pueden existir -es decir, exhibiendo algunas de ellas. La cuestión no es si existe, sino para qué sirve*". A.J. Arnaud -tan sensible en otros sentidos- no lo es en éste: asume sin crítica el concepto decimonónico de "norma jurídica" para la descripción sociológica del derecho. Esto implica asumir la epistemología que el positivismo se dio para articular su versión estatalizada del derecho. Algo que el propio Arnaud critica con acierto. Así, el "*retour du droit*" (1998: 34) indica justamente la crisis de este tipo de derecho.
36. Para una versión ligeramente modificada, cfr. Arnaud 1998: 147 y ss.
37. En un mundo globalizado no cambian solamente las relaciones sociales, sino que el cambio en el objeto de análisis cambia también las actitudes previas del analista y la forma de organizar las investigaciones. "*Es un mundo -escribe E.A. Tiryakian (1994: 138)- marcado por la ruptura de los límites tradicionales y la compartimentalización, a niveles micro y macro*". N.J. Smelser (1996: 276) ha intentado centrar los retos de las ciencias sociales en la redefinición de problemas sociales: (i) la complejidad y diferenciación social creciente; (ii) la tecnología y situación del conocimiento; (iii) la tecnificación de la cultura; (iv) las nuevas formas de democracia y ciudadanía; (v) la nueva concepción de la vida en comunidad. M. Allbrow (1990: 5-10) ha contemplado el desarrollo de la sociología a través de cinco estadios diferentes: (i) universalismo, sociologías nacionales, internacionalismo, indigenización y globalización. B. Smart (1994: 157) ha discutido esta asunción de una "sociología global": "*es más adecuado explorar los distintos modos en que las transformaciones globales han conducido simultáneamente a la dispersión de algunas formas comunes, productos e ideas y así, en la medida en que éstos son recibidas, interpretadas, adaptadas y reutilizadas en contextos culturales potencialmente diferentes, han contribuido a la (re)producción o (re)constitución de la diferencia y la diversidad*". En el mismo sentido se ha pronunciado De Sousa Santos (1995). J.N. Pieterse (1994: 161) ha subrayado también la emergencia de formas mixtas de cooperación, "hibridación cultural" y "mezclas culturales translocales".

BIBLIOGRAFÍA

- ABEL, Richard; LEWIS, Philip S.C. (eds.): *Lawyers in Society* 3 vols. Berkeley, University of California Press, 1988.
- ABEL, Richard: *The Law & Society Reader*. New York and London, New York University Press, 1995a.
- ABEL, Richard: "Revisioning Lawyers" en ABEL, R., Lewis, P.S.C. (eds.): *Lawyers in Society. An Overview*. Berkeley, University of California Press, 1995b, p. 1-38.
- ABEL, Richard; LEWIS, Philip S.C. (eds.): "Putting Law Back into the Sociology of Lawyers" en ABEL, R.L.; LEWIS, P.S.C. (eds.): *Lawyers in Society. An Overview*. Berkeley, University of California Press, 1995, p. 281-329.
- ALLBROW, Martin: "Globalization, Knowledge and Society" en ALLBROW, M. and KING, E. (eds.): *Globalization, Knowledge and Society*. London, Sage, 1990, p. 3-13.
- AÑÓN, María José; BERGALLI, Roberto; CALVO, Manuel; CASANOVAS, Pompeu: *Derecho y Sociedad*. Valencia, Tirant lo Blanc, 1998.
- ARNAUD, André-Jean; FARIÑAS DULCE, M.J.: *Sistemas jurídicos: elementos para un análisis sociológico*. Madrid, Universidad Carlos III, Boletín Oficial del Estado, 1996.
- ARNAUD, André-Jean: *Entre modernité et mondialisation. Cinq leçons d'histoire de la philosophie du droit et de l'Etat*. Paris, L.G.D.J., 1998.

AXELROD, Robert: "The Dissemination of Culture. A model with local convergence and global polarization", *Journal of Conflict Resolution*, v. 41, n. 2/1997, p. 203-226.

BAILIS, Daniel S.; MacCOUN, Robert J.: "Estimating Liability Risks with the Media as Your Guide: A Content Analysis of Media Coverage of Tort Litigation", *Law and Human Behavior*, 20, 4/1996, p. 419-429.

BERNASCONI, Paolo (ed.): *Blanchiment d'argent et secret bancaire: Rapport General: XIVe Congrès international de droit comparé, Athènes, Août 1994 = Money Laundering and Banking Secrecy: General Report: XIVth International Congress of Comparative Law, Athens, August 1994*. The Hague, London, Boston, Kluwer Law International, 1996.

BLACK, Donald: *Sociological Justice*. Oxford University Press, 1989.

BLANKENBURG, Erhard; COMMAILLE, Jacques; GALANTER, Marc (eds.): "Disputes and Litigation", *Oñati Proceedings* n. 12/1991.

BLANKENBURG, Erhard: "Legal Cultures Compared", *Disputes and Litigation*. 1991, p. 11-21.

BLANKENBURG, Erhard: "Civil Litigation Rates as Indicators for Legal Cultures" en NELKEN, D. (ed.): *Changing Legal Cultures*. Aldershot, Dartmouth, 1997a, p. 41-68.

BLANKENBURG, Erhard: "How Fast can Culture Change? Comment on Downes" en FEEST, J. & BLANKENBURG, E.: *Changing Legal Cultures*. IISL, 1997b, p. 47-50.

BILMES, Jack: "Ethnomethodology, culture and implicature", *Pragmatics* vol. 3, n. 4/1993, p. 387-410.

BONAFÉ-SCHMITT, Jean-Pierre: "Contentieux familial et médiation. Une comparaison internationale" en BLANKENBURG, E.; COMMAILLE, J. GALANTER, M.: *Disputes and Litigation*. Oñati, IISL, 1991, p. 105-125.

BOUDON, Raymond: "A propos des sentiments de justice: Nouvelles remarques sur la théorie de Rawls", *L'année sociologique* vol. 45, n. 2/1995, p. 273-295.

BOURCIER, Danièle: "Une approche sémantique de l'argumentation juridique: dire et c'est-à-dire", *L'Année Sociologique*, 45/1995, p. 35-57.

CALVO GARCÍA, Manuel: "Paradojas regulativas: las contradicciones del derecho en el estado intervencionista" en AÑÓN, M.J.; BERGALLI, R.; CALVO, M.; CASANOVAS, P. (coord.): *Derecho y Sociedad*. Valencia, Tirant lo Blanch, p. 99-129.

CARBONNIER, Jean: "Closing Session" en ARNAUD, A.J. (ed.): "Legal Culture and Everyday Life. Inauguration Ceremony (24 may 1989)", *Oñati Proceedings* n. 1/1989, p. 127-128.

CARTIER-BRESSON, Jean: "Corrupción institucionalizada y neocorporativismo, con ejemplos del caso francés", *Nueva Sociedad*, 145/1996, p. 110-125.

CASANOVAS, Pompeu: "Sobrelegalización y desjuridificación en el derecho norteamericano", *Revista Internacional de Sociología, CSIC*, 3/1992, p. 5-58.

CASANOVAS, Pompeu: "La transformación del derecho norteamericano: Welfare, Due Process, mental health in California", *Quaderns de Treball* n. 4/1994. Centre d'Estudis de Drets Humans, UAB.

CASANOVAS, Pompeu: "Sobrelegalización, desjuridificación, sobreorganización en el Estado de California", *Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho* n. 16/1995. México, p. 257-268.

CASANOVAS, Pompeu: *Gènesi del pensament jurídic contemporani*. Barcelona, Ed. Proa-Enciclopèdia Catalana, 1996.

CASANOVAS, Pompeu: "Notes on Legal Young Professional Culture in Spain. An interpretative hypothesis of some statistical and field data". Workshop on *Judges: Selection and Evaluation*, March 17-18 1997. Oñati, IISJ.

CASANOVAS, Pompeu: "Algunos elementos para el análisis pragmático de los discursos jurídicos" en AÑÓN, M.J.; BERGALLI, R.; CALVO, M.; BERGALLI, R. (eds.): *Derecho y Sociedad*. Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 1998a.

CASANOVAS, Pompeu: "Mòdul 4. Pragmàtica del dret" en MORESO, J.J.; CASANOVAS, P.: *Metodologia jurídica i teoria de la interpretació*. Universitat Oberta de Catalunya, 1998b.

CASANOVAS, P.; ARDEVOL, E.; MACH, J.: "Marcadores pragmáticos y aplicaciones fractales para el análisis de los discursos jurídicos" en BODELÓN, E. y PICONTO, T.: *Las transformaciones del derecho y del estado contemporáneo: nuevas perspectivas de la investigación sociojurídica*. Ed. Dickinson, en prensa, 1998.

CASTELLS, Manuel: *Problemas de investigación en sociología urbana*. Madrid, Siglo XXI, 1971.

CASTELLS, Manuel: *The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I: The Rise of the Network Society; vol.2. The Power of Identity*. Oxford, Blackwell, 1996-1997 (Hay trad. castellana en Alianza Editorial, 1997).

CASTELLS, Manuel; HALL, Peter: *Las tecnópolis del mundo. La formación de los complejos industriales del siglo XXI*. Madrid, Alianza Ed., 1994.

COHEN-TANUGI, Laurent: *Le droit sans l'Etat. Sur la démocratie en France et en Amérique*. Paris, PUF, 1985.

CONLEY, John M.; O'BARR, William M.: *Rules versus Relationships. The Ethnography of Legal Discourse*. Chicago and London, The University of Chicago Press, 1990.

COTTERRELL, Roger: "The Rule of Law in Transition: Revisiting Franz Neumann's Sociology of Legality", *Social & Legal Studies* n. 5, 4/1996, p. 451-470.

CHIBA, Masaji: "An Operational Definition of Legal Culture in View of both Western and non-Western" en FEEST, J.; BLANKENBURG, E.: *Changing Legal Cultures*. Oñati Pre-publications IISL, 1997, p. 93-108.

DEZALAY, Yves: "Un 'bing bang' professionnel? Les enjeux professionnels et politiques de la globalisation du marché du service aux entreprises" en FERRARI, Vincenzo, FARALLI, Carla (eds.): *Laws and Rights. Proceedings of the International Congress of Sociology of Law for the Ninth Centenary of the University of the University of Bologna*. Milano, Dott. A. Giuffrè Ed., 1993, p. 51-79.

DEZALAY, Yves: "'Turf battles' or 'class struggles': the internationalization of the market for expertise in the 'professional society'", *Accounting, Organizations and Society*, vol. 20, n. 5/1995, p. 331-344.

DEZALAY, Yves: "Between the State, Law, and the Market: The Social and Professional Stakes in the Construction and Definition of a regulatory Arena" en BRATTON, W.; McCAHERY, J.; PICCIOTTO, S.; SCOTT, C.: *International Regulatory Competition and Coordination. Perspectives on Economic Regulation in Europe and the United States*. Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 59-87.

DEZALAY, Yves; SUGARMAN, David (eds.): *Professional Competition and Professional Power. Lawyers, Accountants and the Social Construction of Markets*. London and New York, Routledge, 1995.

DEZALAY, Yves; GARTH, Bryant: "Focussing about the Forum: Categories and definitions as Stakes in a Professional Competition", *Law & Social Inquiry*, 21, 2/1996, p. 285-312.

DEZALAY, Yves; GARTH, Bryant: "Law, Lawyers and Social Capital: 'Rule of Law' versus relational Capitalism", *Social & Legal Studies* vol. 6 n. 1/1997, p. 109-141.

DRUCKMAN, Daniel; MITCHELL, Christopher: "Flexibility in Negotiation and Mediation", *Annals of the American Academy of Political and Social Science [Flexibility in International Negotiation and Mediation. Special Editors: Daniel Druckman and Christopher Mitchell]*, 542/1995, p. 10-23.

DUNWORTH, Terence; ROGERS, Joel: *Law & Social Inquiry*, 21, 3/1996, p. 497-592.

ESSER, John P.: "Instituzionalizing Industry: The Changing Forms of Contract", *Law & Social Inquiry* 21, 3/1996, p. 593-629.

FAIST, Thomas: "A Preliminary Analysis of Political-Institutional Aspects of International Migration: Internationalization, Transnationalization, and Internal Globalization", *ZeS-Arbeitspapier* n. 10/1995.

FAGET, Jacques: *La médiation. Essai de politique pénale*. Toulouse, Erès, 1997.

FEEST, Johannes & BLANKENBURG, Erhard: *Changing Legal Cultures*. Oñati Pre-Publications. International Institute for the Sociology of Law, 1997.

FELDMAN, Eric: "Patients' Rights, Citizens' Movements and Japanese Legal Culture" en NELKEN, D. (ed.): *Comparing Legal Cultures*. Aldershot, Dartmouth, 1997a, p. 215-236.

FELDMAN, Eric: "Japanese Legal Culture: An Outsider's Guide to the Inside" en FEEST, J.; BLANKENBURG, E.: *Changing Legal Cultures*. 1997b, p. 9-19.

FLOOD, John: "The cultures of globalization. Professional Reestructuring for the International Market" en DEZALAY, Yves and SUGARMAN, David (eds.): *Professional Competition and Professional Power. Lawyers, Accountants and the Social Construction of Markets*. London and New York, Routledge, 1995, p. 139-169.

FLOOD, John: "Megalawyering in the legal order: the cultural, social and economic transformation of global legal practice", *International Journal of the Legal Profession*, vol. 3, n. 1-2/1996, p. 169-214.

FREYHOLD, Hanno von; GESSNER, Volkmar; OLGATI, Vittorio: *The role of Courts in Global Legal Interaction*. Aldershot, Dartmouth, 1996, p. 269-281.

FRIEDMAN, Lawrence M.: "Takig Care: The Law of Conservatorship in California", *Southern California Law Review*, v. 61, 2/1988, p. 273-290.

FRIEDMAN, Lawrence M.: "The Concept of Legal Culture: A Reply" en NELKEN, D. (ed.): *Changing Legal Culture*. Aldershot, Dartmouth, 1997, p. 33-40.

FRIEDMAN, Lawrence M.; SCHEIBER, Harry N. (eds.): "Introduction", *Legal Culture and the Legal Profession*. Boulder, Westview Press, 1996.

GALANTER, Marc: "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change" en ABEL, R. (ed.): *The Law & Society Reader*. 1995, p. 297-323.

GALLIGAN, D.J. (ed.): *Socio-legal Studies in Context: the Oxford Centre. Past and Future*. Oxford, Blackwell, 1995.

GARAPON, Antoine: "French Legal Culture and the Shock of 'Globalization'", *Social & Legal Studies*, vol. 4/1995, p. 493-506.

GARAPON, Antoine: *Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire*. Paris, Ed. Odile Jacob, 1997.

GARCÍA VILLEGAS, Mauricio: *La eficacia simbólica del derecho. Examen de situaciones colombianas*. Santafé de Bogotá, Ediciones Uniandes, Universidad de los Andes, 1993.

GESSNER, Volkmar: "Global Approaches in the Sociology of Law: Problems and Challenges" en GALLIGAN, D.J. (ed.): *Socio-legal Studies in Context: the Oxford Centre. Past and Future*. Oxford, Blackwell, 1995, p. 85-96.

GESSNER, Volkmar: "International Cases in German First Instance Courts", *Foreign Courts: Civil Litigation in Foreign Legal Cultures*. Aldershot, Dartmouth, 1996a, p. 149-207.

GESSNER, Volkmar: "The Institutional Framework of Cross-Border Interaction", *Foreign Courts: Civil Litigation in Foreign Legal Cultures*. Aldershot, Dartmouth, 1996b, p. 15-41.

GESSNER, Volkmar; HOELAND, Armin; VARGA, Csaba: *European legal Cultures*. Aldershot, Dartmouth, 1996.

GIBSON, James L. & CALDEIRA, Gregory A.: "The Legal Cultures of Europe", *Law & Society Review* vol. 30 n. 1/1996, p. 55-86.

GOODRICH, Peter: "Law and Languages: An Historical and Critical Introduction" en THOMAS, Phillip A. (ed.): *Legal Frontiers*. Aldershot, Dartmouth, 1996.

GRANT, Wyn: "Transnational companies and environmental policy making: the trend of globalisation" en LIEFFERING, J.D.; LOWE, P.D.; MOL, A.P.J. (eds.): *European Integration and Environmental Policy*. London and New York, Belhaven Press, 1993, p. 59-74.

GUARNIERI, Carlo; PEDERZOLI, Patrizia: *La democrazia giudiziaria*. Bologna, Il Mulino, 1997.

HABERMAS, Jürgen: "Postscript to *Between Facts and Norms*" en DEFLEM, Mathieu (ed.): *Habermas, Modernity and Law*. London, Sage Publications, 1996, p. 135-150.

HALLIDAY, Fred: "Gobernabilidad global: perspectivas y problemas", *Revista Internacional de Filosofía Política*, n. 9/1997, p. 23-38.

HAMPTON, Mark P.: "Exploring the Offshore Interface: The Relationship between Tax Havens, Corruption and Economic Development", *Crime, Law and Social Change*, 24, 4/1995-1996, p. 293-317.

HARTLAND, Nick: "System and Repetition in Legal Discourse: A Critical Account of Discourse Analysis of the Law", *Australian Journal of Law and Society* 9/1993, p. 89-104.

HERZOG, Peter; HERZOG, Brigitte Ecolivet: "The reform of the legal professions and of legal aid in France", *International and Comparative Law Quarterly* vol. 22/1973, p. 462-491.

HEYDEBRAND, Wolf: "Culture and Structure in the Comparative Sociology of Law: A Typology of Legal Cultures and Four Examples" en FEEST, J. & BLANKENBURG, E. (eds.): *Changing Legal Cultures*. IISL, 1997, p. 141-190.

HOLSTEIN, James A.: *Court-Ordered Insanity. Interpretive Practice and Involuntary Commitment*. New York, Aldine de Gruyter, 1993.

HOPMANN, P. Terrence: "Two paradigms of negotiation", *Annals, AAPSS*, 542/1995, p. 24-47.

HORWITZ, Morton: *The Transformation of American Law*. Oxford, Oxford University Press, 1992.

JACKSON, Bernard S.: "Towards a semiotic model of professional practice, with some narrative reflections on the criminal process", *International Journal of the Legal Profession*, v. 1. n. 1/1994, p. 55-79.

KAGAN, Robert A.: "Do Lawyers cause Adversarial Legalism? A Preliminary Inquiry", *Law and Social Inquiry*. American Bar Foundation, 1994, p. 1-62.

KAWASHIMA, Takeyoshi: "Dispute Resolution in Contemporary Japan" en MEHREN, A.v. (ed.): *Law in Japan: The Legal Order of a Changing Society*. Cambridge, Mass., Harvard University Press.

KENNEDY, David: "Autumn Weekends: An Essay on Law and Everyday Life" en SARAT, A.; KEARNS, T.R. (eds.): *Law in Everyday Life*. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1993, p. 191-235.

LIEFFERING, J.D.; LOWE, P.D.; MOL, A.P.J.: *European Integration and Environmental Policy*. London, Belhaven Press, 1993.

LORENZ, E.: *The Essence of Chaos*. Washington, UCL Press, 1993.

MacCORMICK, Neil: "Law and Philosophy: The rediscovery of Practical Reason" en THOMAS, Ph.A. (ed.): *Legal Frontiers*. 1996, p. 41-65.

MANN, Michael: "El nacionalismo y sus excesos: una teoría política", *Debats* n. 50/1994, p. 45-55.

MARKESINIS, Basil S.: "Litigation-mania in England, Germany and the USA: are we so very different?", *The Cambridge Law Journal* 49 (2), 1994, p. 233-276.

MERRY, Sally Engle: "Going to Court: Strategies of Dispute Management in an American Urban Neighborhood" (1979), ABEL, R.L. (ed.): *The Law & Society Reader*. New York University Press, 1995, p. 36-57.

MESCH, Gustavo S.; SCHWIRIAN, Kent P.: "The Effectiveness of Neighborhood Collective Action", *Social problems*, v. 43, n. 4/1996, p. 467-483.

MIYAZAWA, Setsuo: "The Enigma of Japan as a Testing Ground for Cross-Cultural Criminological Studies" en NELKEN, D. (ed.): *Comparing Legal Cultures*. Aldershot, Dartmouth, 1997, p. 195-214.

MOL, Artur P.J.; LIEFFERING, J. Duncan: "European environmental policy and global interdependence: a review of theoretical approaches", *European Integration and Environmental Policy*. 1993, p. 17-35.

MURUYAMA, Masayuki: "Comment on Feldman" en FEEST, J.; BLANKENBURG, E.: *Changing Legal Cultures*. Oñati Pre-publications, IISL, 1997, p. 19-30.

NEDERVEEN PIETERSE, Jan: "Globalisation as hybridisation", *International Sociology*, vol. 9, n. 2/1994, p. 161-184.

NELKEN, David (ed.): *Comparing Legal Cultures*. Aldershot, Dartmouth, 1997.

NORRIE, Alan: "From Law to Popular Justice: Beyond Antinomianism", *Social & Legal Studies* 5, 3/1996, p. 383-404.

OGUS, A.I.: "Law and Economics in the United Kingdom: Past, Present and Future" en GALLIGAN, D.J. (ed.): *Socio-legal Studies in Context: The Oxford Centre. Past and Future*. Oxford, Blackwell, 1995, p. 26-34.

OLGIATI, Vittorio: *Le professioni giuridiche in Europa. Politiche del diritto e dinamica sociale*. Università degli Studi di Urbino, Istituto di Sociologia, Quattroventi, 1996a.

OLGIATI, Vittorio: "Cross-border litigation in Italy" en GESSNER, V. (ed.): *Foreign Courts: Civil Litigation in Foreign Legal Cultures*. Aldershot, Dartmouth, 1996b, p. 209-247.

OLGIATI, Vittorio: *Towards a new Universitas Mercatorum: the political economy of the Chamber of Commerce of Milan*. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, 1997.

OLGIATI, Vittorio; ORZAK, Louis; SAKS, Mike (eds.): "Professions, Identity, and Order in Comparative Perspective", *Oñati Papers* 4-5/1998, Oñati, IISJL.

PARDIECK, Andrew: "Foreign Legal Consultants: The Changing Role of the Lawyer in a Global Economy", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 3, 2/1996, p. 457-479.

PASTOR PRIETO, Santos: *Ah de la Justicia! Política Judicial y Economía*. Madrid, Civitas, 1993.

PASTOR PRIETO, Santos: "El papel del estado y el mercado. Rasgos e implicaciones políticas" en TEZANOS, J.F.; MONTERO, J.M.; DÍAZ, J.A.: *Tendencias de futuro en la sociedad española*. 1997, p. 167-184.

PÉREZ LLEDÓ, Juan A.: *El movimiento "Critical Legal Studies"*. Madrid, Tecnos, 1996.

PÉREZ PERDOMO, Rogelio: "Seguridad jurídica y competitividad: coordenadas para una investigación" en BOZA, M.E.; PÉREZ PÉRDOMO, R. (eds.): *Seguridad Jurídica y Competitividad*. Caracas, Ed. IESA, 1996, p. 1-24.

POBLET, Marta: "Les relacions socials als Tribunals de Justícia. Una observació participada als Jutjats de Terrassa", *Revista Catalana de Sociologia* n. 4/1997, p. 97-128.

POLZER, Jeffrey T.: "Intergroup Negotiations: The Effects of Negotiating Teams", *Journal of Conflict Resolution*, 40, 4/1996, p. 678-698.

POWELL, Walter W.: "Fields of Practice: Connections between Law and Organizations", *Law and Social Inquiry* 21, 4/1996, p. 954-966.

RICH, Robert M.: "Sociological Paradigms and the Sociology of Law: an Overview" en REASONS, Ch.E.; RICH, R.M. (eds.): *The Sociology of Law. A Conflict Perspective*. Toronto, Butterworth and Co., 1978, p. 147-189.

RÖHL, Klaus; MAGEN, Stefan: "Die Rolle des Rechts im Prozess der Globalisierung", *Zeitschrift für Rechtssoziologie* 17, 1/1996, p. 1-57.

RUBIN, Edward L.: "The New Legal Process. The Synthesis of Discourse, and the Microanalysis of Institutions", *Harvard Law Review*, v. 109, p. 1393-1432.

SARAT, Austin; KERNS, Thomas R.: *Law in Everyday Life*. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1993.

SASSEN, Saskia: "Rebuilding the Global City", *Social Justice*, vol. 20, n. 3-4/1995, p. 32-50.

SCHLEGEL, John Henry: *American Legal Realism & Empirical Social Science*. University of North Carolina Press, 1995.

SCHLEGEL, John Henry: *American Legal Realism and Empirical Social Science*. London, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1997.

SELZNICK, Philip: "The Sociology of Law" en SIMON, Rita James (ed.): *The Sociology of Law. Interdisciplinary Readings*. San Francisco, Chandler Publishing, 1968, p. 190-200.

SELZNICK, Philip: "Kommunitaristischer Liberalismus", *Der Staat: Zeitschrift für Staatslehre, Öffentliches Recht und Verfassungsgeschichte*, vol. 34, n. 4/1995, p. 487-502.

SIMON, Herbert A.: *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, Mass., The MIT Press, 1969.

SMART, Barry: "Sociology, globalisation and postmodernity: comments on the 'sociology for one world' thesis", *International Sociology* 9, 2, p. 149-159.

SMELSER, Neil J.: "Social Sciences and Social Problems: The Next Century", *International Sociology*, vol. 11, n. 3/1995, p. 275-290, 1996.

SNYDER, Francis: "Law and Anthropology" en THOMAS, Ph.A. (ed.): *Legal Frontiers*. Aldershot, Dartmouth, 1996, p. 135-179.

SOUSA SANTOS, Boaventura de: "Three Metaphors for a New Conception of Law: The Frontier, The Baroque, and the South", *Law & Society Review* v. 29, n. 4/1995a, p. 569-584.

SOUSA SANTOS, Boaventura de: *Toward a New Common Sense. Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*. New York, London, Routledge, 1995b.

SOUSA SANTOS, Boaventura de: "A queda do 'Angelus Novus': Pra além da equação moderna entre raízes e opções", *Revista Crítica de Ciências Sociais* vol. 45/1996, p. 5-34.

SOUSA SANTOS, Boaventura de; MARQUES, Maria Manoel Leitao; PEDROSO, Joao; LOPES FERREIRA, Pedro: *Os tribunais nas sociedades contemporâneas. O caso português*. Porto, Edições Afrontamento, 1996.

SUCHMAN, Marck C.; EDELMAN, Lauren B.: "Legal Rational Myths: The New Institutionalism and the Law and Society Tradition", *Law & Social Inquiry* v. 21, n. 4/1996, p. 903-941.

STANGELAND, Per: "Discrepancias entre estadísticas policiales y judiciales", *Boletín Criminológico* n. 2, Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, julio/agosto 1994, p. 1-4.

TAMANAHA, Brian Z.: *Realistic Socio-legal Theory*. Oxford, Clarendon Press, 1997.

TAMANAHA, Brian Z.: "The Internal/External Distinction and the Notion of a 'Practice' en Legal Theory and Sociolegal Studies", *Law & Society Review* vol. 30, n. 1/1996, p. 163-204.

TANASE, Takeo: "The Management of Disputes: Automobile Accident Compensation in Japan" (1990), in ABEL, R. (ed.): *The Law & Society Reader*. 1995, p. 58-83.

TEUBNER, Gunther (ed.): *Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society*. Berlin, N. York, Walter de Gruyter, 1988.

TEUBNER, Gunther: "Regulatory Law: Chronicle of a Death Foretold", *Current Legal Theory. International Journal for the Theory of Law and its Documentation*, vol. XIV n. 1/1996, p. 3-29.

TEUBNER, Gunther: "*Altera pars audiatur*. le droit dans la collision des discours", *Droit et Société* 35/1997, p. 99-123.

TEZANOS, José Félix; MONTERO, José Manuel; DÍAZ, José Antonio: *Tendencias de futuro en la sociedad española. Primer foro sobre tendencias sociales*. Madrid, Sistema, 1997.

THOMAS, Philip A.: *Legal Frontiers*. Aldershot, Dartmouth, 1996.

TIRYAKIAN, Edward A.: "The new worlds and sociology: an overview", *International Sociology* 9, 2/1994, p. 131-148.

TOHARIA, José Juan: "*Pleitos tengas!...*" *Introducción a la cultura legal española*. Madrid, CIS, S. XXI, 1987.

TOHARIA, José Juan: "La Administración de Justicia", *Informe FOESSA*. 1994, p. 651-674.

TOHARIA, José Juan: Consejo General del Poder Judicial *Libro Blanco de la Administración de Justicia*. Madrid, CGPJ, 1997.

TRUBECK, David M.: "Back to the future: the short, happy life of the Law and Society Movement", *Florida State University Law Review* vol. 18 n. 1/1990, p. 1-55.

TRUBECK, David M.; DEZALAY, Yves; BUCHANAN, Ruth; DAVIS, John, R.: "Global Restructuring and the Law: Studies of the Internationalization of Legal Fields and the Creation of Transnational Arenas", *Case Western Reserve Law Review*. vol. 44, n. 2/1994, p. 407-498.

TWINING, William: "Remembering 1972: The Oxford Centre in the Context of Developments in Higher Education and the Discipline of Law" en GALLIGAN (ed.): *Socio-legal Studies in Context: the Oxford Centre. Past and Future*. 1995, p. 36-50.

UNGER, Roberto Mangabeira: *What should legal analysis become?* London, New York, Verso, 1996.

WARGLIEN, Massimo; MASUCH, Michael (eds.): *The Logic of Organizational Disorder*. Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1996.

WARREN, Carol A.B.: *The Court of Last Resort. Mental Illness and the Law*. Chicago, The University of Chicago Press, 1982.

WEINBERGER, Graz Ota: "Luhmann's Approach to Ethics, Jurisprudence, and Legal Sociology". My reasons for doubts. *ARSP* vol. 82, n. 4, 4/1996, p. 543-552.

WERNICK, Andrew: "Global Promo: the Cultural Triumph of Exchange", *Theory, Culture & Society*, vol. 8/1991, p. 89-109.

WISSLER, Roselle L.: "Mediation and Adjudication in the Small Claims Court: The Effects of Process and Case Characteristics", *Law & Society Review* v. 29 n. 2/1995, p. 323-357.

WOOD, Diane P.: "United States Antitrust Law in the Global Market", *Global Legal Studies Journal*, v. 1/1994, p. 409-429.

YNGVESSON, Barbara: "Inventing Law in Local Settings: Rethinking Popular Legal Culture", *The Yale Law Journal* v. 98/1989, p. 1669-1709.

ZIEGERT, Klaus A.: "A Theory Design for the Assessment of Legal Change: The Cultural Differentiation of Post-communist Societies and their Law", *Politische Steuerung moderner Industrie-Gesellschaften: Diskussions-Papiere*, PoSt, 9/1996, p. 1-66.